

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-2102-2019
CARATULADO : CONSORCIO SANTA MARTA S.A./ILUSTRE
MUNICIPALIDAD ANTOFAGASTA

Antofagasta, dos de Junio de dos mil veintiuno

VISTOS:

Con fecha 17 de abril de 2019, comparece doña María de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes, abogada, en representación de Consorcio Santa Marta, ambos con domicilio en calle Eduardo Orchard N° 963, departamento 404, Antofagasta, e interpone demanda de responsabilidad del Estado por falta de servicio con indemnización de perjuicios en contra de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, representada por su Alcaldesa doña Karen Rojo Venegas, se ignora profesión u oficio, ambas con domicilio en Avenida Séptimo de Línea N° 3505, Antofagasta.

Funda la demanda en que durante el mes de julio de 2014 la Municipalidad de Antofagasta realizó el llamado a Licitación Pública a través de Decreto N° 1198/2014, denominado “Contrato por la Concesión Municipal del Centro de Tratamiento y Disposición Final Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, Comuna de Antofagasta, II Región Chile”, resultando en definitiva adjudicada Consorcio Santa Marta S. A. mediante Decreto Alcaldicio N° 507/2015, de fecha 15 de abril de 2015, por lo que con fecha 17 de abril de 2015, ambas partes suscribieron el Contrato por la Concesión Municipal del Centro de Tratamiento y Disposición Final Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, Comuna de Antofagasta, II Región Chile (BIP N° 30109379-0) ID 2430-55-LP14. Las etapas y plazos para la ejecución de las distintas etapas se establecieron en el punto 9 de las Bases Administrativas Especiales de la licitación, la que consideraba una etapa de diseño, una etapa de construcción y puesta en marcha, una etapa de operación y un plan de cierre de abandono.

Iniciada la etapa de diseño del proyecto, y dando cumplimiento con las BAE y el contrato, Santa Marta ingresó a evaluación al Servicio de Evaluación Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto denominado “Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos, el que fue calificado ambientalmente en forma favorable mediante Resolución Exenta N°127/2016, de 8 de abril de 2016, dictada por la Comisión de Evaluación de Antofagasta, que determinó los permisos



sectoriales que debían obtenerse ante la Seremi de Salud, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Seremi de Transportes, añadiendo que Santa Marta incorporó en la DIA, además de las obras incluidas en su oferta, dos obras adicionales: i) Una plataforma para una cancha de futbolito, y, ii) Una Planta de Tratamiento de residuos industriales líquidos (RILES), destinada a tratar tanto los líquidos lixiviados producidos por el mismo relleno sanitario como residuos industriales líquidos provenientes de terceros que quisieran tratarlos ahí. Al respecto señala que ambas obras no fueron incluidas en la oferta y por tanto no forman parte de las obras contratadas por la demandada. En relación con la Planta de tratamiento ofrecida la COEVA, mediante Resolución Exenta N°0127/2016 de fecha 8 de abril de 2016, excluyó el tratamiento de riles provenientes de terceros, y a su turno, la Seremi de Salud, mediante Resolución Exenta N°562 de fecha 7 de julio de 2017, prohibió en su considerando 2.14 el tratamiento de aguas servidas, residuos industriales líquidos externos y tratamiento de lixiviados provenientes del Relleno Sanitario de la Comuna de Antofagasta, por lo que de esta manera, al tramitarse la autorización sanitaria del Relleno Sanitario, se excluyó la Planta de Tratamiento de Lixiviados, y se proyectó una planta de tratamiento más pequeña, destinada únicamente a tratar los riles provenientes del lavado de los camiones recolectores y de la limpieza de la planta de reciclaje. No obstante lo anterior, en marzo de 2018, luego de otorgada la autorización sanitaria de funcionamiento en las condiciones ya señaladas, la Seremi de Salud cambió drásticamente de opinión, y mediante Resolución Exenta N°1129 de fecha 8 de marzo de 2018, eliminó del considerando 2.14 la prohibición de tratar el lixiviado proveniente del Relleno Sanitario de la comuna de Antofagasta, ordenando además la construcción de una piscina de 500 m3 para tratar el lixiviado generado en el relleno sanitario Chaqueta Blanca, debiendo ser aprobado por el SEA mediante una solicitud de pertinencia, por exigencia de la demandada, la que fue resuelta con fecha 27 de agosto de 2018 mediante Resolución Exenta N°0165 que determinó que la construcción de una piscina de 500 m3 para tratar el lixiviado generado en el relleno sanitario Chaqueta Blanca no requería de su ingreso al sistema para evaluación a través del SEIA, agregando que la habilitación de esta piscina no requería de un trámite adicional debido a que no revestía la entidad suficiente para requerirlo, sin embargo, fue a solicitud de la Municipalidad que fue necesario ingresar una consulta de pertinencia ante el SEA de Antofagasta, con la finalidad de ratificar que su construcción no requería de su ingreso para



evaluación a través del SEIA, con el evidente retraso en la tramitación y posterior construcción de esta piscina.

Indica que la Municipalidad es responsable por falta de servicio por el actuar negligente de los distintos departamentos que forman parte de ella, correspondiendo se indemnicen todos los perjuicios causados a Santa Marta, como consecuencia de lo anterior, entre otros, la negativa injustificada de aprobar el diseño definitivo o los planos As-Built, lo que trajo como consecuencia a la demandante no avanzar con el proyecto y la imposibilidad de avanzar con el proyecto y además ha generado serios perjuicios económicos a Santa Marta, toda vez que mientras la Municipalidad no tenga por aprobado el diseño definitivo, no será posible facturar el saldo de la fase de construcción que se encuentra pendiente de pago desde hace más de dos años y tampoco será posible recuperar el monto de la retención equivalente a un 5% del monto total de la fase de construcción.

Además señala que otra consecuencia es la negativa en formar la comisión de recepción y por lo tanto autorizar la recepción provisoria de la obra, ya que no ha nombrado a la fecha la comisión de recepción, pese a haberlo solicitado la actora en tres oportunidades y se han realizado observaciones al proyecto sin estar formada la comisión de recepción, y por lo tanto sin levantar el acta de observaciones, ni fijar plazo para subsanarlas, y sin pronunciarse si ellas impiden el inicio de la operación provisoria del relleno sanitario, es decir, al efectuar observaciones sin cumplir con las formalidades exigidas, no se otorgó plazo alguno a Santa Marta para subsanarlas; ni se informó si el proyecto estaba o no en condiciones de iniciar su etapa de marcha blanca.

Por otra parte, se incluye la negativa en otorgar la patente comercial provisoria, la que fue presentada en tres oportunidades. Asimismo, como se aprecia en los informes de zonificación, la Dirección de Obras excede las facultades que le han sido otorgadas por ley, toda vez que únicamente debe señalar si la zonificación donde se emplaza el proyecto es compatible con los instrumentos de planificación, y no le corresponde al Director de Obras determinar si procede o no el otorgamiento de una patente provisoria, lo que es competencia exclusiva de la Dirección de Rentas de la Municipalidad, la que sin embargo, a la fecha y pese a la insistencia de la actora, aún no dicta una resolución acogiendo o rechazando la solicitud de patente provisoria.

Expone que en la especie, se cumplen con todos los requisitos de la responsabilidad por falta de servicio, a) cuando el órgano público ha funcionado mal o en forma defectuosa, existiendo por lo tanto una acción



positiva que causa daño; b) cuando no ha funcionado, es decir, el daño se produjo por una omisión, existiendo el deber funcional de actuar; y, c) cuando se ha actuado tardíamente, es decir, el daño se produjo por una falta de diligencia funcionaria. Por otra parte, se trata de una responsabilidad objetiva, en cuanto no es necesaria la concurrencia de culpa o dolo del funcionario, puesto que solamente se requiere la falta de servicio.

Solicita en definitiva, se condene a la demandada a título de indemnización de perjuicios a pagar lo siguiente: i) Por concepto de daños materiales, la suma de \$698.000.000.- ii) Por concepto de lucro cesante, la suma de \$1.488.000.000.- y iii) Por concepto de daño moral, la suma de \$655.000.000.- siendo un total de \$2.841.000.000.- o aquélla que el Tribunal tenga a bien determinar, en base al mérito del proceso, la que deberá reajustarse entre el día de la notificación de la demanda y la del pago efectivo, conforme a las variaciones del índice de Precios al Consumidor más el interés corriente para operaciones no reajustables, con expresa condena en costas.

Con fecha 13 de julio de 2019, la Ilustre Municipalidad de Antofagasta solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas, alegando que por medio del Decreto Alcaldicio N° 507, de 15 de abril de 2015, se adjudicó la licitación a la empresa Consorcio Santa Marta S.A., suscribiéndose el contrato de concesión por la referida empresa con 17 de abril de 2015, el que fue aprobado por el Decreto Alcaldicio N° 638, de 5 de mayo de 2015, por un valor de \$293.085.676.-, por concepto de la etapa de diseño con un plazo de ejecución de 100 días corridos, y por valor de \$3.767.935.239.-, por concepto de etapa de construcción con un plazo de ejecución de 136 días corridos, y por un valor de \$7.990, por concepto de etapa de operación, valor por tonelada a cobrar considerando el modelo de negocios, es decir, entre la Municipalidad de Antofagasta y la empresa Consorcio Santa Marta S.A. existe en la actualidad una vinculación o relación de carácter contractual, añadiendo que una vez aprobada la etapa de diseño, se dio inicio a la etapa de construcción, haciéndose entrega del terreno a la empresa con fecha 9 de agosto de 2016, comenzado a computarse el plazo ofertado por la empresa para la ejecución de la construcción, sin embargo, la ejecución de obra ha sido objeto de mayores plazos, totalizándose 5 mayores plazos, aprobados por los Decretos Alcaldicios N° 87-2017, 520-2017, 1475-2017-1801-2017, y 1303-2018, otorgando el último decreto un aumento de plazo de 180 días corridos quedando como nueva fecha legal de término de la etapa de construcción el



día 20 de agosto de 2018 y desde esa fecha en adelante no existió por parte de la empresa contratista ninguna solicitud de mayor plazo, pese a encontrarse inconclusa la obra, lo que se ha mantenido incluso hasta la interposición de la presente demanda.

Indica que la acción indemnizatoria bajo el estatuto de responsabilidad por falta de servicio que se ha deducido resulta ser absolutamente improcedente, puesto que los hechos y alegaciones que se han hecho valer para darle sustento a la misma dicen relación con materias que están establecidas en la licitación pública “Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables Comuna de Antofagasta”, II Región, Chile (BIP N° 30109379-0) ID 2430-55-LP14, y en el contrato de concesión suscrito entre Consorcio Santa Marta S.A. y la Municipalidad de Antofagasta, por lo que tales alegaciones no pueden servir de base para dar sustento al régimen de responsabilidad extracontractual por falta de servicio existiendo incompatibilidad de los regímenes de responsabilidad, añadiendo que las alegaciones señaladas por la actora, dicen relación con medidas y/o procedimientos que se encuentran establecidos en las bases administrativas, bases técnicas, aclaratorias, y demás instrumentos de la licitación pública antes señalada y en el propio contrato, por lo que, si hipotéticamente dichos procedimientos y/o medidas no han sido respetados por alguna de las partes, surge lo que se denominada un incumplimiento contractual surgiendo con ello la denominada responsabilidad extracontractual, y no, como ha pretendido la actora, el estatuto de la responsabilidad contractual, pues quien pretende invocar el estatuto de la responsabilidad extracontractual, a pesar de existir un contrato válidamente celebrado, destruye el principio de la fuerza obligatoria del contrato y de la primacía del contrato reconocido ampliamente en el artículo 1545, 1556 y 1557 del Código Civil y pretender utilizar dichos antecedentes para sustentar la responsabilidad extracontractual significaría lisa y llanamente vulnerar la fuerza obligatoria del pacto contractual, lo que no se encuentra permitido por el ordenamiento jurídico, por lo que deberá desecharse esta acción indemnizatoria por ser improcedente.

En subsidio, alega la inexistencia de la responsabilidad extracontractual por falta de servicio, ya que no concurren los elementos de dicha responsabilidad y en cuanto a las alegaciones de negativa injustificada en aprobar el diseño definitivo y planos As-built y negativa en formar la comisión de recepción y por lo tanto autorizar la recepción provisoria de la obra, concluye que la Municipalidad de Antofagasta no ha actuado con falta



de servicio, sino que ha velado porque en todo momento se dé íntegro cumplimiento al contrato suscrito entre las partes, lo que, además, se ha visto refrendado por la propia auditoria que ha realizado la Contraloría General al contrato en comento, por lo que malamente puede darse por establecido el primer elemento de la responsabilidad, esto es, la acción u omisión en los términos de no haberse actuado, haberse actuado tardíamente o haberse actuado imperfectamente. Por otra parte, en lo que se refiere a la negativa de otorgar patente comercial, cabe señalar que, no resulta ser efectivo que la Municipalidad de Antofagasta haya incurrido en falta de servicio, puesto que lo único que se ha hecho es dar cumplimiento a la normativa legal vigente.

Concluye señalando que siendo improcedente esta acción indemnizatoria por enmarcarse las alegaciones dentro del contrato debidamente suscrito entre las partes, o bien, no concurriendo los elementos de la responsabilidad extracontractual por falta de servicio, la presente demanda deberá ser desechada con una expresa y ejemplificadora condena en costas.

Con fecha 22 de julio de 2019, rola escrito de réplica, en el cual la parte demandante ratifica y confirma todas las alegaciones expresadas en la demanda, añadiendo que la presente demanda se interpuso solicitando se declarara la responsabilidad del estado por falta de servicio, con indemnización de perjuicios, en contra de la municipalidad dada la deficiencia en su actuar como entidad pública, cuyo origen puntualmente es la negativa injustificada por parte de la demandada de aprobar el diseño definitivo del proyecto denominado “Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios Comuna de Antofagasta”, o en su defecto, de permitir que se haga la entrega de los planos as-built, como parte del procedimiento de recepción de la obra, dentro de los trámites necesarios para cualquier persona que requiere iniciar el procedimiento de recepción de cualquier obra ante una entidad municipal, además la negativa injustificada por parte de la demandada de conformar la Comisión de Recepción para la recepción de la obra relleno sanitario Chaqueta Blanca, como parte del procedimiento de recepción de la obra, ello dentro de los trámites establecidos como necesarios para cualquier persona que requiere iniciar el procedimiento de recepción definitiva de una obra que ya cuenta con su correspondiente permiso de edificación, ello con el fin de autorizar su uso ante una entidad municipal y la negativa injustificada por parte de la demandada de otorgar la



patente provisoria para el proyecto denominado “Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios Comuna de Antofagasta”, como parte del procedimiento de obtención de patente comercial, dentro de los trámites necesarios para cualquier persona que requiere regularizar el inicio de una actividad comercial ante una entidad municipal.

Concluye señalando que se debe tener presente que si bien la Municipalidad es mandante de Consorcio Santa Marta S.A. en el contrato que las liga, es la misma Municipalidad quien además se relaciona como ente público en otros ámbitos con la demandante, más allá de su calidad de mandante, es quien debe otorgar la patente comercial provisoria, recibir la obra y aprobar el diseño definitivo de la obra de modo que se ajuste al permiso de edificación aprobado, y es justamente en ese ámbito en que se ha producido la falta de servicio, siendo del todo procedente la demanda interpuesta.

Con fecha 01 de agosto de 2019, rola escrito de dúplica, en el cual la parte demandada reitera al efecto todos y cada uno de los argumentos señalados en la contestación de la demanda, añadiendo que resulta imposible resolver el asunto sin tener que recurrir al contrato de obra material suscrito por las partes y analizar su cumplimiento, razón por la cual su parte ha alegado la improcedencia del estatuto de responsabilidad extracontractual al proceso de la especie y la contraria ha recurrido a esta modalidad, pues sabe que el contrato ha sido incumplido por ellos de manera grave y reiterada, pues no se entiende porque razón entonces no se inició un proceso sobre responsabilidad contractual, agregando los daños que se alegan en la demanda, están intrínsecamente relacionados con los montos de la propuesta pública y las utilidades proyectadas por el funcionamiento del Centro de Tratamiento, cuestión que obliga nuevamente a sostener la improcedencia de la demanda en los términos que fueran expuestos.

Con fecha 29 de agosto de 2019, se llamó a las partes a una conciliación, la que no se produjo.

Con fecha 10 de septiembre de 2019, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha 21 de septiembre de 2020, se citó a las partes a oír sentencia, se decretaron medidas para mejor resolver y cumplidas éstas, se trajeron los autos para fallo.

CONSIDERANDO:



I.- En cuanto a las tachas opuestas:

PRIMERO: Que la parte demandante tachó al testigo Héctor Gómez Salazar, en virtud del artículo 358 N° 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, ya que deponente declaró ser funcionario de la parte que lo presenta.

SEGUNDO: Que evacuando el respectivo traslado, la parte demandante solicita el rechazo de la tacha opuesta, señalando que su parte no ha exigido su comparecencia y tampoco se cumple la calidad de trabajador puesto que se trata de un funcionario público, además tampoco tiene un interés en el juicio.

TERCERO: Que respecto a la inhabilidad del artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, será rechazada atendido que bien nuestra Excma. Corte Suprema ha resuelto en reiteradas ocasiones que los funcionarios públicos que deponen en juicio por parte del Fisco o alguna repartición del aparato administrativo estatal, no se encuentran en los casos del artículo 358 N° 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto estas causales se fundan en el estrecho vínculo de dependencia entre el testigo y la parte que lo presenta, que no es el caso de los funcionarios públicos.

Respecto a la causal del N° 6 del artículo referido, si bien no se desprende de los dichos del testigo la existencia de interés alguno en los resultados del juicio, del mérito del proceso se puede arribar a una conclusión diversa, toda vez que de la prueba documental allegada a esta causa y tal como se asevera por la demandante, el referido testigo participó en su calidad de Administrador Municipal durante las gestiones administrativas del Proyecto, incluso reconoce haberse desempeñado como Alcalde Subrogante de esta comuna, todo lo cual permite concluir que se sitúa más en una de calidad de parte interesada en los resultados del juicio a favor de quien lo presenta a declarar, lo que evidentemente le resta imparcialidad, por lo que será **acogida** la tacha en esta parte.

CUARTO: Que, la parte demandante tachó al testigo Juan Gálvez Barnechea, en virtud del artículo 358 N° 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, conforme declara ser funcionario de la parte que lo presenta y tener en virtud de su cargo imparcialidad para declarar en juicio.

QUINTO: Que evacuando el traslado respectivo, la parte demandante solicita el rechazo de la tacha opuesta, señalando que la Municipalidad no ha exigido jurídicamente ni procesalmente su comparecencia, tratándose además de un funcionario público, no teniendo por otra parte ningún interés en el juicio.



SEXTO: Que respecto a la inhabilidad del artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, será rechazada atendido que nuestra Excma. Corte Suprema ha resuelto en reiteradas ocasiones que los funcionarios públicos que deponen en juicio por parte del Fisco o alguna repartición del aparato administrativo estatal, no se encuentran en los casos del artículo 358 N° 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto estas causales se fundan en el estrecho vínculo de dependencia entre el testigo y la parte que lo presenta, que no es el caso de los funcionarios públicos.

Por otra parte, respecto a la causal del N° 6 del artículo referido, no desprendiéndose de los dichos del testigo la existencia de interés alguno en los resultados del juicio, lo cierto es que éste reconoció ser el Director de Obras Municipales de la Municipalidad demandada, a lo que debe adicionarse la circunstancia que en las tres faltas de servicio que sirven de fundamento al libelo pretensor tuvo éste una intervención en su carácter de órgano público que habría participado en la comisión de las supuestas actuaciones negligente imputadas de contrario, lo que eventualmente, en caso de estimarse procedente estas alegaciones, y de condenarse al ente edilicio demandado, éste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 inciso 2° de la Ley de Municipalidades, podría repetir en su contra, todo lo cual permite aseverar que se configura el interés exigido por esta causal, razones todas por la cuales **se acogerá** la misma.

SÉPTIMO: Que la parte demandante tachó al testigo Raúl Aracena Berkhoff, en virtud del artículo 358 N° 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, conforme declara ser funcionario de la parte que lo presenta y tener en virtud

OCTAVO: Que evacuando el traslado respectivo, la parte demandante solicita el rechazo de la tacha opuesta, señalando que la Municipalidad no ha exigido jurídicamente ni procesalmente su comparecencia, tratándose además de un funcionario público, no teniendo por otra parte ningún interés en el juicio.

NOVENO: Que como ya se ha dicho respecto de las tachas tratadas anteriormente, respecto a la inhabilidad del artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, será rechazada atendido que nuestra Excma. Corte Suprema ha resuelto en reiteradas ocasiones que los funcionarios públicos que deponen en juicio por parte del Fisco o alguna repartición del aparato administrativo estatal, no se encuentran en los casos del artículo 358 N° 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto estas causales se fundan en



el estrecho vínculo de dependencia entre el testigo y la parte que lo presenta, que no es el caso de los funcionarios públicos.

Respecto a la causal del N° 6 del artículo antes citado, no desprendiéndose de los dichos del testigo la existencia de interés alguno en los resultados del juicio, lo cierto es que éste señala ser Jefe del Departamento de Ejecución de Obras Municipales, quien conforme fluye de la documental acompañada en este proceso, intervino activamente en la ejecución del Proyecto de marras, en su carácter de Unidad Técnica, cuyo accionar ha sido estimado como fundamento de algunas de faltas de servicios demandadas, todo lo cual permite concluir que aquél tiene el interés exigido por la norma, lo cual le resta imparcialidad y, eventualmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 inciso 2° de la Ley de Municipalidades, el ente edilicio podría repetir en su contra, todo lo cual permite concluir que se configura el interés por esta causal, razones por la cuales **se acogerá** la misma.

DÉCIMO: Que la parte demandada tachó a la testigo Alejandra Orellana Araya, en virtud del artículo 358 N° 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, conforme declara tener una relación de naturaleza laboral y es dependiente de la parte demandante.

UNDÉCIMO: Que la parte demandante, evacuando el traslado conferido, señala que si bien la testigo es trabajadora dependiente, su declaración no depende en ningún caso la relación laboral que mantiene con Consorcio Santa Marta, además ha presenciado directamente los hechos materia de este juicio.

DUODÉCIMO: Que el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil establece que son inhábiles para declarar, los trabajadores o labradores dependientes de la persona que exige su testimonio. Y habiendo el testigo reconocido que trabaja para Consorcio Santa Marta, se configura a su respecto la tacha alegada por la contraria, debiendo en consecuencia, **acogerse** la misma.

Habiéndose acogido la tacha por la causal del el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, no se emitirá pronunciamiento del artículo 358 N° 4 del código ya citado, por innecesario.

DÉCIMO TERCERO: Que la parte demandada tachó al testigo César Méndez Orellana, en virtud del artículo 358 N° 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, conforme declara tener una relación de naturaleza laboral, con contrato indefinido y es dependiente de la parte demandante.



DÉCIMO CUARTO: Que la parte demandante, evacuando el traslado conferido, señala que si bien el testigo es trabajador dependiente, su declaración no depende en ningún caso la relación laboral que mantiene con Consorcio Santa Marta, además ha presenciado directamente los hechos materia de este juicio.

DÉCIMO QUINTO: Que al igual que se resolvió en la causal de tacha anterior, el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil establece que son inhábiles para declarar, los trabajadores o labradores dependientes de la persona que exige su testimonio. Y habiendo el testigo reconocido que trabaja para Consorcio Santa Marta, se configura a su respecto la tacha alegada por la contraria, debiendo en consecuencia, **acogerse** la misma.

Habiéndose acogido la tacha por la causal del el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, no se emitirá pronunciamiento del artículo 358 N° 4 del código ya citado, por innecesario.

II.- En cuanto al fondo del asunto:

DÉCIMO SEXTO: Que doña María de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes, abogada, en representación de Consorcio Santa Marta, ha interpuesto demanda de responsabilidad del Estado por falta de servicio con indemnización de perjuicios, fundada en los hechos ya pormenorizados en la parte expositiva de esta sentencia.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que la demandada solicita el rechazo de la demanda en los términos ya pormenorizados en los vistos de este fallo.

DÉCIMO OCTAVO: Que la parte demandante, a fin de acreditar los fundamentos de su demanda, rindió en autos la siguiente prueba: **I.- Documental:** consistente en:

- 1.- Oficio N° 355/2016.
- 2.- Informe Técnico N° 3.
- 3.- Acta de reunión N° 1.
- 4.- Carta de fecha 14 de mayo de 2018 y 27 de agosto de 2019.
- 5.- Oficio N° 2537/2018.
- 6.- Cartas de solicitud de recepción definitiva.
- 7.- Oficio Ord. 368/2017, 540/2017 y 072/2018.
- 8.- Carta CSM de fecha 24 de enero de 2018.
- 9.- Set de informes de Zonificación.
- 10.- Permiso de edificación N° 02532/2016.
- 11.- Ordenanza para el otorgamiento de patente provisoria.



12.- Decreto N° 507/2015, 87/2017, 520/2017, 1475/2017, 1801/2017 y 1303/2018.

13.- Contrato de concesión municipal.

14.- Aclaratoria N° 1, propuesta pública.

15.- Respuestas a consultas, segunda ronda.

16.- Decreto 1198/2014.

17.- Bases administrativas especiales, propuesta pública internacional.

18.- Bases técnicas, propuesta pública internacional.

19.- Aclaratoria N° 1 y 2, comisión de apertura de propuesta pública.

20.- Anexo N° 4 corregido.

21.- Nuevo anexo N° 7.

22.- Resolución Exenta N° 559-560-561-562-586-604 todas de 2017.

23.- Resolución Exenta 1129-5162-366-484-334 todas de 2018.

24.- Ordinario N° 02456 y 484 de 2018.

25.- Fallo Rol 1014-2019 de la Illma. Corte Apelaciones de Antofagasta.

26.- Acta de Inspección Notarial.

27.- Resolución exenta N° 0403/2017, 0132/2018, 0165/2018, 0130/2019, 127, 647 y 702.

28.- Ordinario 858/2017.

II.- Testimonial, consistente en las declaraciones de doña Alejandra Orellana, Jorge Guzmán Briones, Tomás Gálvez Sálas, Patricio Ossandón García, Pedro Rivas Valdivia y César Méndez Orellana.

DÉCIMO NOVENO: Que la parte demandada por su parte, rindió en la causa las siguientes probanzas:

I.- Documental, consistente en:

1.- Oficio N° 414/2019.

2.- Informe técnico N° 19

3.- Oficio Ord. N° 15/2019, 161/2019 y 687/2018.

4.- Decreto Alcaldicio N° 507/2015, 87/2017, 520/2017, 1475/2017, 1801/2017, 81/2018, 1303/2018 y 02/2019.

5.- Informe final N° 242/2018.

6.- Bases técnicas propuesta pública.

7.- Decreto Alcaldicio N° 683/2015.

8.- Decreto Alcaldicio N° 1198/2014.

9.- Oficio E N° 2613/2018, 3611/2019, 3836/2019, 3857/2019.



II. 1.- En relación a la improcedencia del estatuto de la responsabilidad extracontractual por falta de servicio:

VIGÉSIMO: Que, en la contestación de la demanda, la demandada Municipalidad solicitó su rechazo por estimar improcedente el estatuto de la responsabilidad extracontractual por falta de servicio, toda vez que en los hechos y alegaciones que su contraria ocupa como sustento su pretensión, guardan relación con materias establecidas en la Licitación pública del Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, comuna de Antofagasta, II Región Chile, como en relación al contrato de concesión suscrito por las partes, todo lo cual no puede servir de base para reclamar el régimen de responsabilidad antes referido, por incompatibilidad de los estatutos de responsabilidad civil, principalmente porque él o los hechos ilícitos invocados como fundamento de la falta de servicio provendrían de un incumplimiento contractual, tal como se indicó en la parte expositiva de esta sentencia.

En la réplica, la apoderada de la parte demandante, en este punto, controvierte lo manifestado de contrario, señalando que el fundamento de su pretensión, encuentra su sustento en el deficiente actuar de la demandada como entidad pública, reiterando para ello que aquellas faltas que reclama del órgano edilicio, precisando que la demandada es responsable por falta de servicio, debido al actuar negligente de los distintos departamentos que formaban parte del proyecto, aseverando que en su demanda no se hace referencia a incumplimientos contractuales por parte de la Municipalidad en relación al contrato que los unía, haciendo presente que su contraria es mandante de su parte, con quien además se relaciona con su carácter de ente público en otros ámbitos, más allá de su calidad de contratante demandante, pues, es quien, entre otras cosas, le debe otorgar la patente comercial provisoria, recibir la obra y aprobar el diseño definitivo de la misma, de modo que se ajuste el permiso de edificación aprobado, siendo justamente ese ámbito en el que se produjo la falta de servicio imputada, por lo que es del todo procedente su demanda.

Por su parte, en su escrito de réplica, la demandada insistió en que las imputaciones vertidas de contrario en lo relativo a su responsabilidad extracontractual por falta de servicio, guarda relación con aspectos contractuales y con la obligación de su parte de exigir el cumplimiento de la normativa legal aplicable, explicitando finalmente que resulta ser imposible de resolver el asunto sometido a la decisión de este tribunal, sin tener que recurrir al contrato de obra material suscrito por las partes y analizar su



cumplimiento, haciendo presente que su contraparte accionó de la forma que lo hizo, pues sabe que el reseñado pacto contractual ha sido incumplido por ésta, de manera grave y retirada, pues de otra manera no entiende porque razón, no demandó de responsabilidad contractual.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, conforme a las alegaciones referidas y teniendo especialmente presente, por una parte la demandante alega que el estatuto de responsabilidad reclamado es el extracontractual por falta de servicio, y por otra, la demandada lo controvierte, en cuanto señala que el fundamento mismo de la pretensión en orden a configurar dichas faltas tendría necesariamente su origen en supuestos ilícitos civiles cometidos por la IMA en el desarrollo y ejecución del proyecto Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, comuna de Antofagasta, II Región Chile como del contrato celebrado entre las partes.

En este punto, cabe precisar que, en principio, la responsabilidad patrimonial del Estado y la responsabilidad civil que reglamenta el derecho común, tendrían aspectos que la diferencian, especialmente porque la segunda tiene su antecedente en el derecho privado, en que las partes se encuentran en una posición de igualdad, donde ninguna de ellas tiene una potestad de derecho o de supraordenación respecto de la otra; en cambio, en la primera de las responsabilidades mencionadas, se caracteriza por relaciones de derecho público, en la medida que el Estado tiene funciones que a menudo envuelven la potestad de afectar intereses privados y modificar situaciones jurídicas, por lo que, por sus peculiaridades éste responde existiendo condiciones específicas, lo que no significa que los institutos del derecho privado no puedan ser aplicados al de la responsabilidad estatal, cuando éste actúa como gestor o empresario, debiendo añadirse que *“...cuando el daño es atribuible a una actuación del Estado en ejercicio de sus funciones, normativas o de servicios, la configuración del hecho que da lugar a la responsabilidad tiene que hacerse cargo de la naturaleza de sus funciones...”* (**ENRIQUE BARROS BOURIE**, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, página 481 y siguientes, Primera Edición junio de 2007). Según este mismo autor *“Sin perjuicio de esas especiales condiciones de responsabilidad de la Administración del Estado y de las municipalidades, el complejo ordenamiento de la responsabilidad extracontractual actúa como estatuto general y supletorio en las materias que no son objeto de conceptos y reglas especiales de derecho público. Así ocurre en materias técnicamente tan importantes como el daño, la causalidad, la titularidad de la acción y su extinción por la prescripción.*



Por ello, una visión global de la responsabilidad civil requiere un examen de las particularidades de la responsabilidad del Estado con acento tanto en las diferencias específicas como en las analogías que presenta con el estatuto general de la responsabilidad civil.”

Conforme al mismo autor, existen distintos criterios de atribución de responsabilidad del Estado, precisando que **la por falta de servicio** cumple en el ámbito de la actividad propia de la administración, una función análoga a la responsabilidad por culpa en el derecho privado, pues, como en el caso de la culpa civil, no se exige un juicio de reproche personal respecto del agente del daño, sino que supone una valoración objetiva de la conducta de la administración, de manera tal, que ella exige calificar “*de defectuoso el funcionamiento del servicio público*”, lo que supone comparar el servicio efectivamente prestado con el que se debió ejecutar por el municipio u órgano de la administración del Estado, añadiendo que dicha responsabilidad no es estricta u objetiva en un sentido propio porque no basta acreditar que el daño fue causado por la acción u omisión de la administración, sino que supone un juicio de valor acerca del nivel y calidad del servicio que era exigible del municipio o del órgano de administración. Agrega, que este estatuto especial no es de carácter subjetivo, pues, es indiferente quien incurrió en el hecho que da lugar a la responsabilidad, como también la justificación que el agente de la administración pueda tener para su comportamiento objetivamente impropio, es decir, y como lo ha sostenido la jurisprudencia, la falta de servicio no es más que una culpa en el servicio.

Sin perjuicio de lo indicado, cabe destacar lo sostenido por este autor en cuanto a que las reglas de la responsabilidad civil se aplican de manera subsidiaria al estatuto particular en estudio, conforme a criterios asentados por los tribunales superiores de justicia.

Conforme a lo reseñado, se puede aseverar que en todas aquellas materias no especialmente reglamentadas en el estatuto especial de responsabilidad extracontractual del estado por falta de servicio, se aplican subsidiariamente las de la responsabilidad civil del derecho común.

Así las cosas, conforme a lo controvertido en este punto por la municipalidad demandada, en cuanto a que el régimen aplicable no es el reseñado sino que uno de carácter contractual, la interrogante a dilucidar es si en la especie se aplican las normas de responsabilidad civil extracontractual por falta de servicio del estado o la por incumplimiento contractual, debiendo para ello dejarse previamente asentado que no se



encuentra controvertido por las partes que con fecha 17 de abril de 2015, celebraron el Contrato por la Concesión Municipal del Centro de Tratamiento y Disposición Final Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, Comuna de Antofagasta, II Región Chile (BIP N° 30109379-0) ID 2430-55-LP14, sin perjuicio de lo cual, conforme a lo alegado por la actora en su demanda y escrito de réplica, en la especie ésta no reclama un incumplimiento de su contraria en relación a obligaciones derivadas del contrato celebrado con la IMA en su calidad de contratante, sino que en virtud de ilícitos civiles provenientes de la posición especial que la demandada ocupa en su calidad de órgano público del Estado, es decir, como en tercero ajeno a la relación jurídica contractual que los unía.

A este respecto, cabe indicar que no existiendo norma especial que resuelva la problemática planteada, necesario se hace acudir a las normas de derecho común y conforme lo ha señalado la Doctrina, en especial el profesor **BARROS BOURIE** en su libro ut supra, se estaría en presencia de lo que se ha denominado “**concurso de responsabilidades**”, lo que guarda relación con la calificación jurídica del hecho que da lugar a la responsabilidad, en el caso de que éste, pueda ser considerado a la vez de un incumplimiento al contrato y de un ilícito extracontractual, siempre que dicha cuestión fáctica igualmente dé lugar a responsabilidad si no existiere un pacto contractual previo. Agrega, que no existe discusión en cuanto a que si las partes en la convención han definido expresamente los términos de la responsabilidad y dicha convención es válida, no existiría razón para invocar las reglas del derecho común que establecen las condiciones y efectos de la responsabilidad civil “ *donde las partes han convenido expresamente una regla especial, no cabe la opción, por simple aplicación del principio de autonomía privada reconocida por el artículo 1545.*” , siendo distinto el caso cuando no existe una voluntad inequívoca de los contratantes en orden de someter su relación a reglas convencionales que difieren del derecho general de la responsabilidad.

Indica que parte de la doctrina ha sostenido que al celebrarse un contrato se acepta por los contratantes la aplicación de todas las normas legales de derecho dispositivo referente al derecho de contratos, tanto de las reglas generales como las que corresponden al tipo de contrato en particular, por lo que en consecuencia, la voluntad implícita de quienes convienen en un contrato de excluir la aplicación del ordenamiento de la responsabilidad aquiliana, que solo regiría en relación a daños provocados fuera de toda relación contractual, debido a que el derecho de contratos, es



especial respecto del estatuto de la responsabilidad extracontractual, toda vez que, el mismo tiene el efecto de modificar la regla general, en cuya virtud rige el estatuto de responsabilidad extracontractual que resulta aplicable a falta de otro ordenamiento.

En esta parte, precisa que la doctrina chilena más influyente, siguiendo a la francesa, aceptó tradicionalmente que el contrato excluye al estatuto extracontractual, aceptando como excepciones solo los casos en que el incumplimiento contractual constituye también un ilícito penal o cuando así lo han convenido las partes. Sin embargo, el autor citado discute que habiendo contrato, la voluntad implícita de los contratantes es la de excluir la responsabilidad aquiliana, sosteniendo que *“En efecto, se puede también asumir, desde el punto de vista lógico, que si las partes no han pactado expresamente sobre ciertas materias, aceptan tácitamente las consecuencias que el derecho dispositivo en general para la conducta negligente del autor del daño, lo que incluye tanto las normas supletorias del derecho de contratos como los deberes generales de cuidado que nos debemos en nuestro tráfico recíproco.”* Indica, que siguiendo la doctrina dominante en el derecho comparado no habría razón lógica para excluir la aplicación de la responsabilidad extracontractual, siendo el argumento determinante las circunstancias que los deberes generales de cuidado que se tienen respecto de la persona y la propiedad de los demás pueden ser definidos por el contrato, caso en el cual, éste último predomina, pero, por el contrario, a falta de una determinación convencional, no se puede entender que haya intención implícita de excluir la aplicación de norma alguna del derecho común. En conclusión, a falta de regla contractual que excluya la aplicación de un ordenamiento asevera, que *el actor puede optar por el estatuto legal que le resulte más conveniente, a menos que haya alguna razón específica para que prevalezca el estatuto contractual.*

Adicionalmente, luego de afirmar que la responsabilidad extracontractual es el régimen general y supletorio de responsabilidad, en el caso en análisis, lo conveniente es tener presente la diferencia de grado que existe entre la obligación indemnizatoria en base al contrato y la que surge del ilícito extracontractual, por lo que, para aplicar el estatuto de responsabilidad contractual, el fundamento de la pretensión indemnizatoria ha de ser necesariamente ***el incumplimiento de una obligación principal que tenga su fuente en la convención***, adicionando que, en materia extracontractual, por el contrario, la relación obligatoria nace por la infracción



de un deber general de cuidado impuesto por el derecho de no causar daño a otro.

Conforme a lo señalado, si bien no está controvertido que existe un contrato que vincula a las partes de este juicio, se puede aseverar que en la demanda no se alega como fundamento de la pretensión deducida el incumplimiento por parte de la demandada de una obligación principal de la reseñada convención, sino que una negligencia en la que habría incurrido ésta en su calidad de órgano público del Estado, el que estaría constituido por la infracción del deber general de cuidado impuesto por el derecho de no causar daño a la persona o propiedad de otro, último aspecto, que tratándose de responsabilidad por falta de servicio, se identifica con lo que se ha denominado **culpa en el servicio**, esto es, que producto del mal funcionamiento del mismo, un funcionamiento tardío o el no funcionamiento de él, se produce, como consecuencia de una acción u omisión defectuosa, un daño al usuario o beneficiario del servicio público que se trate.

En relación con lo anterior, se debe tener en consideración, como ya se indicó, que en los casos en que un órgano estatal se vincula jurídicamente con particulares por medio de un contrato, además de cumplir el rol de contratante, se sitúa en una posición de supremacía general al detentar las potestades que el sistema normativo le atribuye en relación con la totalidad de los ciudadanos, entre los que se encontraría la demandante, de manera tal que todas las acciones que éste despliegue en el ejercicio de aquella esfera y atribuciones legales deben ser analizadas, cuando en ello se le imputa haber cometido una negligencia en el servicio público que presta, desde el prisma del estatuto especial de la responsabilidad civil extracontractual del Estado, tal como ha sido alegado en la presente contienda, de manera tal que, teniendo a la vista el principio de la congruencia civil consagrado en el **artículo 160 del Código de Procedimiento Civil**, sin perjuicio de la primacía del principio *iura novit curia*, la pretensión objeto de la presente contienda es determinar si efectivamente la IMA incurrió en algún ilícito civil, no en su posición de contratante, sino como órgano integrante de la maquinaria estatal, en todas aquellas cuestiones que se invocan como constitutivas de las faltas de servicios reclamadas, lo que conforme al principio de inexcusabilidad debe ser determinado en esta sentencia, razones todas por la cuales **se rechazará** esta alegación, sin perjuicio de lo que al respecto pueda resolverse en definitiva.



II. 2.- En lo referente a la demanda por responsabilidad extracontractual en contra de la Municipalidad de Antofagasta, por falta de servicio:

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, dilucidado lo anterior, corresponde a esta magistratura referirse a la falta de servicio alegada por la actora, sin embargo y, de manera previa, para una acertada resolución de la acción promovida, se hace necesario detallar los antecedentes probatorios más relevantes que constan en el proceso, a saber:

1.- Que con fecha **23 de agosto de 2012**, el Gobierno Regional de Antofagasta celebró con la Ilustre Municipalidad de Antofagasta un Mandato, en virtud del Acuerdo GORE N° 10.006-12, por el que se dispuso el proyecto denominado ***“Construcción centro de tratamiento y disposición final de RSD”***, el que se financiaría con cargo al F.N.D.R. (Tradicional), cuya ejecución se encomendó en forma completa e irrevocable a la I.M. de Antofagasta, en carácter de Unidad Técnica, la gestión técnica y administrativa de la ejecución del reseñado proyecto, lo que comprendía la elaboración de las Bases de Administrativas, licitación, adjudicación, celebración de los respectivos contratos, supervisión e inspección y hasta la liquidación y/o recepción definitiva o final de la obra.

Se deja consignado que la “Unidad Técnica” se obligó a ejecutar completa y exclusivamente el proyecto, y que cualquier cambio o alteración al mismo, debía ser previamente **autorizada** por el mandante (GORE), de lo que se debía dejar constancia en un Addendum.

También se estableció que la **gestión financiera del proyecto** quedaba radicado en el mandante y que su **ejecución** debía ser adjudicado por la Unidad Técnica, bajo la modalidad de **suma alzada, sin reajustes ni intereses de ningún tipo y con estados de pago**, siendo ésta responsable de la fiscalización técnica, administrativa y de la correcta emisión de los estados de pago del proyecto, obligándose el mandante a solventarlos dentro de los 3 días siguientes de la recepción conforme de los estado de pago presentados por la Unidad Técnica, adicionándose que en caso de que éstos le lleguen en forma incompleta, quedarán retenidos hasta la recepción conforme de toda la documentación por parte de la sindicada unidad.

Se consignó que el monto total del proyecto ascendería a **\$4.381.396.240.-**, con cargo al F.N.D.R. TRADICIONAL, aprobado por Resolución N° 82 de fecha 24 de julio de 2012 del Gobierno Regional.



Según este documento, se estableció que el Intendente Regional tenía facultades de fiscalización, coordinación y supervigilancia, conforme al artículo 111 de la CPR.

En cuanto a las Modificaciones Presupuestarias, se indicó que en caso de existir la necesidad de efectuar algún aumento o disminución presupuestaria motivado por una modificación del proyecto u otra causa, ésta debía ser solicitada y resuelta por el Mandante, previo informe fundado emitido por la Unidad Técnica

2.- Que por medio de **Decreto Nº 1198/2014 Ex.**, de fecha **31 de julio de 2014**, la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, dispuso el llamado a Propuesta Pública, denominada “Contrato por la Concesión Municipal del Centro de Tratamiento y Disposición Final Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, Comuna de Antofagasta, II Región Chile”, por un monto máximo disponible para la etapa de diseño y construcción de **\$4.063.496.600.-**, financiados con fondos F.N.D.R.

3.- Con fecha **15 de abril de 2015**, la I.M. de Antofagasta dicta el **Decreto Nº 507/2015 Ex.**, por medio del cual adjudica la propuesta pública denominada contrato por la concesión “CENTRO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES, COMUNA DE ANTOFAGASTA, II REGIÓN CHILE” CÓDIGO BIP 30109379-0, ID 2430-55-LP14, a la empresa contratista CONSORCIO SANTA MARTA S.A.

4.- Con fecha **17 de abril de 2015**, Consorcio Santa Marta S.A. y la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, suscriben ***Contrato por la Concesión Municipal del “Centro de Tratamiento y Disposición Final Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, Comuna de Antofagasta, II Región Chile”***, el que se encuentra emplazado – según se lee de su estipulación cuarta – *“... en el terreno municipal denominado “Chaqueta Blanca” ubicado en el kilómetro 6 de la Ruta A-26, que corresponde al Lote 3ª, del sector Chaqueta Blanca, lugar Portezuelo...”*, consignándose en su cláusula primera que el sindicado contrato corresponde a la ejecución de diseño definitivo (Ingeniería de Detalle, Resolución de Calificación Ambiental RCA y Permisos Sectoriales), a la Construcción (Obras de Infraestructura General, Relleno Sanitario primera etapa, Centro de Tratamiento y Camino de Acceso) del “Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables”, su operación y posterior cierre”, acordándose que el contrato en cuestión sería uno de ***“suministro a suma alzada”***.



En cuanto al marco normativo aplicable, se dejó consignado que éste pacto se regiría por la Ley N° 19.886 sobre compras Públicas, sus principios y Reglamentos y sus aclaratorias y respuestas a las consultas emitidas por la Municipalidad, las Bases Administrativas Generales, Bases Técnicas y anexos. Supletoriamente por las normas de derecho público y, en defecto de ellos, por las normas del derecho privado, por las estipulaciones del contrato, la oferta de la empresa.

Conforme aparece en la estipulación tercera, el **objeto del contrato** es el ***Diseño, Construcción, Operación y Cierre*** de un Centro de Tratamiento y Disposición Final Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, generados en la comuna de Antofagasta y sus proyecciones durante los próximos 20 años.

En la misma estipulación se especifica que el contrato considera las etapas de ***Diseño del Proyecto; Construcción y Puesta en Marcha; Operación Normal del Proyecto, y Plan de Cierre y Abandono***

En relación al ***Diseño del Proyecto***, se explicita que considera el desarrollo general del “Diseño del Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables” para su construcción y operación por un período de 20 años, el cual comprende un Relleno Sanitario, Centro de Recuperación y Reciclaje y Planta de Compostaje, imponiéndose al concesionario el deber de considerar todas las especificaciones en el diseño del proyecto, Diseño Arquitectónico, Ingeniería Estructural, Ingeniería Vial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería de Control y Comunicaciones y otros, las que deberán ser desarrolladas de acuerdo a su oferta para el desarrollo general del proyecto, como también respetar la Programación y Planificación de esta etapa contenida en la Carta Grantt acompañada a ella.

Se le impone, además, a la Concesionaria la obligación de obtener la Resolución de Calificación Ambiental favorable del proyecto y realizar las modificaciones requeridas por las autoridades, para después de adquirida dicha resolución obtener todos y cada uno de los Permisos Ambientales Sectoriales, ante las autoridades competentes, previo inicio a la construcción del proyecto. Se adiciona que *“Terminada la etapa de Diseño, obtenida la Resolución de Calificación Ambiental favorable, los Permisos Ambientales Sectoriales y la aprobación definitiva del proyecto por la contraparte técnica, la empresa podrá dar inicio a la Etapa de Construcción del “Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables”.*



La empresa concesionaria deberá entregar a la inspección técnica tres copias completas de la totalidad de los antecedentes de cada uno de los Permisos Ambientales Sectoriales.

- **Resolución de Calificación Ambiental***
- **Declaración de Impacto Ambiental aprobada por el SE.***
- **Diseño Definitivo aprobado por la Dirección de obras Municipales.***

El que deberá incluir, Diseño Arquitectónico, Ingeniería Estructural, Ingeniería Vial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Sanitaria de Control y Comunicaciones con sus respectivas Especificaciones Técnicas y Memorias de Cálculos, todos ellos indicados en las Bases Técnicas.

Además, deberá entregar una programación detallada de las etapas sucesivas, Construcción y Operación.

- **Permisos Ambientales Sectoriales Aprobados por los respectivos sectores.”***

*De acuerdo a la Cláusula Séptima de este Contrato, esta etapa consideraba un plazo máximo de **100 días corridos** contados desde el “Acta de Proceder” emitida por la unidad Técnica de la Etapa de Diseño.*

*En lo referente a la **etapa de Construcción y Puesta en Marcha**, se estipuló que la construcción de las obras civiles, de edificación, infraestructura y montaje de los equipos en el proyecto, deberán – tanto en sus etapas principales como en las auxiliares y accesorios – asegurar un funcionamiento correcto, de fácil control y regulación, simplificación del montaje y mantenimiento general, debiendo la Concesionaria cumplir con la programación y planificación de la etapa de Construcción contenida en la Carta Gantt y demás antecedentes de su oferta, como refrendar en los Libros Manifold el desarrollo completo de la etapa.*

*Se indica que “Finalizada la etapa de construcción y realizado el proceso de recepción de obra, el oferente adjudicado deberá iniciar la puesta en Marcha y Marcha Blanca del “Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables”. Esta etapa, considera la prueba de los equipos y la capacitación del personal operativo. El período de marcha blanca será de **2 meses** y se desarrollará al inicio de la etapa de operación, correspondiente principalmente a los trabajos a desarrollar en la plata de recuperación y reciclaje.*

Inicialmente se dará marcha blanca para aplicar todos los ajustes necesarios que deberá implementar el concesionario. Estos períodos no



pueden exceder lo señalado expresamente en el Cronograma o Carta Grantt adjunto a la oferta de la Empresa Concesionaria”.

Conforme a la sindicada estipulación séptima, esta etapa consideraba un plazo máximo de **136 días corridos** contados desde el “Acta de entrega de Terreno” emitida por la unidad Técnica de la Etapa de Diseño y Construcción

En la ***Etapas de Operación del Proyecto***, se indica que una vez concluida la etapa de su ejecución y marcha blanca satisfactoriamente, la empresa tendrá un plazo máximo de 15 días para dar inicio a la etapa de Operación Normal del Centro sindicado, debiendo ser operado el mismo conforme a las actuales normas ambientales y sanitarias aplicables y, en especial, cumplir con las obligaciones refrendadas en la resolución de calificación ambiental, contrato y demás antecedentes de la propuesta, como con todos y cada uno de los plazos consignados en la Carta Grantt de la Oferta para el desarrollo cabal de los servicios, asimismo se comprometió – entre otras - a dar cumplimiento en cada una de las diferentes etapas del proyecto de los principales hitos, así como las fechas programadas para los cambios de máquinas y equipos, ejecución de inversiones y mantenciones en general durante la etapa de operación, agregándose que tiene el deber de llevar un registro diario permanente de los residuos ingresados, cantidades recuperadas cantidades depositadas en el relleno sanitario, que permitan evacuar informes mensuales a la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato de las cantidades de basura recolectadas y los orígenes de éstas, durante todo el período que dura la etapa de operación del contrato.

De acuerdo a la cláusula séptima del contrato, el plazo de operación será de **20 años** (improrrogable), contados desde el Acta de entrega de terreno emitido por la Unidad Técnica de Operación

Finalmente, en relación al ***Plan de Cierre y Abandono***, se expresa que terminado el plazo de 20 años, la empresa deberá contemplar un plan de cierre y abandono del sindicado Centro, con el objeto de asegurar que a su término se ponga en riesgo la salud y seguridad del medio ambiente

En lo referente al **VALOR DEL PROYECTO**, se estipuló que durante la etapa de ejecución su precio – artículo sexto – sería de **\$4.061.020.915.- IVA incluido**, financiados con fondos F.N.D.R., con el siguiente desglose.

- Etapa de Diseño, el valor es de **\$246.290.484.-, más IVA**
- Etapa de Construcción, el Valor es de **\$3.186.332.134, más IVA**



- Etapas de Operación, el valor a cobrar por el contratista será de **\$7.990.- por tonelada de residuos** que ingresen al Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, lo que será financiado con fondos municipales.

Por otra parte, se acordó que **“Las solicitudes de aumento de plazo...”** - tratándose de las etapas de diseño y construcción - deberán ser solicitados por escrito con una antelación mínima de 20 días corridos del término contractual del plazo, los que solo podían ser autorizados por la Alcaldesa, mediante decreto fundado, reservándose ésta el derecho de aceptar o rechazar la solicitud.

En cuanto al **Pago**, en la cláusula undécima se hace la siguiente distinción:

En la **etapa de diseño y construcción (DISEÑO)**, se estipuló que éste se efectuaría por medio de **2 estados de pago**, el primero equivalente al **40% del monto adjudicado**, previa aprobación por parte de SECOPLAN y la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, de un *informe de avance* que debe ser entregado por el concesionario, estado que debía ser tramitado no antes de 65 días contados desde el inicio del plazo y, el segundo, equivalente al **60% restante**, se acordó que se pagaría al finalizar el diseño con todas las aprobaciones de los organismos pertinentes y previa aprobación de SECOPLAN y la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Acto seguido, se detalla la documentación que debe incluirse a la solicitud.

En lo que respecta a la **etapa de diseño y construcción (CONSTRUCCIÓN)**, se estipuló que el **sindicado pago** se realizaría por medio de **estados de pago mensuales**, según programa de trabajo ofertado por el concesionario, especificándose que cada uno de ellos debía ser visado previamente por SECOPLAN y la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato y el Departamento de Ejecución de Obras Municipales, dependiente de la Dirección de Obras Municipales. Al igual que en caso anterior, en detallan los documentos que deben incluirse al momento del cobro.

Sobre la **etapa de operación**, se acordó que el pago de los servicios se realizaría por mes vencido, dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de presentación de la factura en la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

En la Cláusula Novena, se especifica que las **UNIDADES TÉCNICAS** iban a estar conformadas de la manera que sigue.



- **Etapas de Diseño:** Por la Secretaría Comunal de Planificación y Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

- **Etapas de Construcción:** Por la Secretaría Comunal de Planificación, Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato y el Departamento de Ejecución de Obras Municipales, dependiente de la Dirección de Obras Municipales.

- **Etapas de Operación:** Por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

Se adiciona que las **obligaciones de las Unidades Técnicas**, serán las siguientes:

- Velar por el fiel cumplimiento del contrato
- Aplicar las multas correspondientes
- Confeccionar el Acta de entrega de terreno
- Autorizar y tramitar los Estados de Pagos correspondientes
- Solicitar por escrito (indicando monto y período) al Departamento de Gestión y Presupuesto dependiente de la Secretaría de Planificación Comunal de Planificación (Secoplan), la creación y envío de la respectiva Orden de Compra, a través del sistema de informaciones del Portal Mercado Público (www.mercadopublico.cl)
- Recepcionar los antecedentes de acuerdo a la etapa que se indica en los numerales 22.1, 22.2 y 22.3 de las bases administrativas especiales.
- Emitir informe final y acta de recepción conforme de cada etapa
- Tramitar la recepción provisoria y definitiva (sólo en la etapa de construcción)
- Recepcionar la factura, verificando que este correctamente emitida y dar el visto bueno si corresponde (Ley N° 19.983 que “Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copias de la Factura)
- La Unidad Técnica no podrá recepcionar factura sin antes solicitar la generación de la respectiva orden de compra
- Solicitar con la debida anticipación al concesionario las Boletas de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución del Servicio de Operación o la Prórroga de éstas y solicitar su resguardo.

Se agrega que sin perjuicio de lo señalado, el concesionario quedará sujeto a las instrucciones y observaciones que le pudiesen aplicar otros organismos competentes, tanto municipal como públicos, en las materias de su competencia, siendo obligación de éste cumplir con las indicaciones y/o



observaciones realizadas por estos organismos, pudiendo aplicar las multas contempladas en el N° 21 de las Bases Administrativas Especiales.

La empresa, también se obligó a designar un profesional responsable en la Etapas de Diseño, Construcción y Operación, el que debía ser un profesional del área de la construcción (Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil), con experiencia comprobada en cargos o en obras sanitarias según lo establecido en las Bases Técnicas, cuyo nombre debía comunicar por escrito el nombre de dicho profesional, adjuntando su currículum, cuya aceptación por la Inspección Técnica de Obras se tenía que dejar estampada en el Libro de Obras (Acta de Entrega de Terreno). Se especificó que, en el caso de la Etapas de Operación, además se tenía que nombrar un Administrador, el que debía ser un profesional del áreas de la administración titulado (Ingeniero Civil, Ingeniero u otro) con experiencia comprobada en cargos similares y en el manejo de residuos sólidos domiciliarios y asimilables.

Para los efectos sindicados, se acordó que correspondía a la empresa disponer para el uso de la Unidad Técnica un “**Libro de Novedades Diarias**” (Manifold foliado y en triplicado), en el cual la parte fiscalizadora anotará las novedades y observaciones detectadas durante la fiscalización del servicio, plazos y soluciones que se le dieran a ésta o las multas que procediesen aplicar en caso de incumplimientos

5.-Que por medio del **Decreto Alcaldicio N° 638/2015**, de fecha **5 de mayo de 2015**, la I.M. de Antofagasta, aprobó el Contrato de Concesión detallado en el numeral anterior, por el cual se adjudicó la Propuesta Pública a Consorcio Santa Marta S.A. denominada “Centro de Tratamiento y disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliario y Asimilables, Comuna de Antofagasta, II Región, Chile”, por un valor de **\$293.085.676.-** (IVA incluido) por concepto de Etapa de Diseño, con un plazo de ejecución de 100 días corridos y por un valor de **\$3.767.935.238.-** (IVA incluido) por concepto de Etapa de Construcción, con un plazo de ejecución de 136 días corridos, lo que fue financiado con fondos F.N.D.R. (Procesión de Residuos Sólidos), pagadero en estado de pago mensual, según programa ofertado por el contratista, contra presentación de factura previa visación de la Unidad Técnica.

Se añade que, con un valor de **\$7.990.-**, por concepto de Etapa de Operación exento de IVA, valor por tonelada a cobrar sin considerar modelo de negocio y un valor de **\$7.830.-**, exento de IVA, valor por tonelada a cobrar considerando modelo de negocio el cual deberá financiarse con cargo a la



partida 22.08.001, “Servicios Generales, Servicios de Aseo”, del presupuesto municipal vigente

Finaliza indicando que el plazo de vigencia de la Etapa de Operación de la concesión será de **20 años, no prorrogables**, contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno emitida por la Unidad Técnica.

6.- Que en los **Decretos Municipales Números 87/2017** (25 de enero de 2017), **520/2017** (25 de abril de 2017), **1475/2017** (26 de octubre de 2017), **1801/2017** (15 de diciembre de 2017) y **1303/2018** (22 de agosto de 2018), figuran los aumentos de plazo concedido por la Municipalidad respecto del contrato, a saber:

- El **25 de enero de 2017**, se otorgó un Mayor plazo de **65 días corridos** para el término de la obra, del 23 de diciembre de 2016 al 26 de febrero de 2017.

- El **25 de abril de 2017**, se concedió un Mayor plazo de **120 días corridos**, a partir del 26 de febrero de 2017 al 26 de junio de aquel año.

- El **26 de octubre de 2017**, se otorgó un Mayor plazo de **90 días corridos** para el término de la obra, del 26 de junio de 2017 al 24 de septiembre del mismo año.

- El **15 de diciembre de 2017**, se concedió un Mayor plazo de **150 días corridos**, contado desde el 24 de septiembre de 2017 al 21 de febrero de 2018.

- El **22 de agosto de 2018**, se otorgó un Mayor plazo de **180 días corridos** para el término de la obra, del al 21 de febrero de 2018 al 20 de agosto de dicho año.

En esta parte cabe añadir que, de acuerdo al **Decreto Municipal N° 81/2018**, de **18 de enero de 2018**, se regularizó una **Disminución de Obras** por un valor de **\$799.620** (IVA incluido), de la obra denominada “Contrato por la Concesión Municipal del Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, Comuna de Antofagasta, II Región Chile”, ejecutado por la empresa contratista Consorcio Santa Mareta, debido a la rebaja en la capacidad del estanque de acumulación de agua tratada por efecto de eliminación de la planta de riles que quitada por la autoridad sanitaria. Conforme lo anterior, en este acto edilicio, se aprobó la modificación del contrato de ejecución de obra material redactado por la Dirección de Asesoría Jurídica, en lo que a montos se refiere.



7.- Que por **Resolución Exenta N° 0127**, de fecha **8 de abril de 2016**, expedida por la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental de la Región de Antofagasta, se resolvió lo siguiente:

“1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios Comuna de Antofagasta", de Consorcio Santa Marta S.A.

2°. Certificar que el Proyecto "Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios Comuna de Antofagasta" cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable y vigente.

3°. Certificar que el Proyecto "Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios Comuna de Antofagasta", cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 138, 139, 140, 141, 142, 156, 157, 160 y 161 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4° Certificar que el Proyecto "Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios Comuna de Antofagasta" no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

5°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.7. del presente acto.

6°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 19.300 ante el/la Director/a Ejecutivo/a del Servicio de Evaluación Ambiental. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.”

8.- Que por Resolución **Exenta N° 0403/2017**, de fecha **23 de octubre de 2017**, dictada por la Directora Regional del Servicio de Evolución de Impacto Ambiental, Región de Antofagasta, Sra. Patricia De la Torre Vásquez, se resuelve consulta realizada el representante de Consorcio Santa Marta S.A., respecto de la pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante SEIA) del proyecto **“Desplazamiento menor de instalaciones administrativas y**



operacionales por aparición de roca y ajustes de m2 construidos”, en cuyo resuelvo se indica – en resumen – que dicho proyecto no debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que no modifica sustancialmente la extensión, magnitud y duración de los impactos ambientales del proyecto, por no reunir los requisitos del artículo 10 de la Ley 19.300 y artículo 3 del Reglamento del SEIA.

9.- Que por Resolución **Exenta N° 0132/2018**, de fecha **10 de julio de 2018**, emanada de la Directora Regional del Servicio de Evolución de Impacto Ambiental, Región de Antofagasta, Sra. Patricia De la Torre Vásquez, se resuelve consulta realizada el representante de Consorcio Santa Marta S.A., respecto de la pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto **“Ajuste al Diseño de Canales de Evacuación de Aguas Lluvias Centro de Tratamiento de Residuos”**, consignándose en su resuelvo que dicho proyecto **no debe ingresar obligatoriamente al SEIA**, ya que no reúne los requisitos de la letra g) artículo 2° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, explicitándose en su considerando 7° las razones de ello.

10.- Que por Resolución **Exenta N° 0165/2018**, de fecha **27 de agosto de 2018**, emanada de la Directora Regional (S) del Servicio de Evolución de Impacto Ambiental, Región de Antofagasta, Sra. Daniela Luza Rojas, se resuelve consulta realizada el representante de Consorcio Santa Marta S.A., respecto de la pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto **“Ajuste de tamaño de piscina de acumulación de lixiviados Centro de Tratamiento de Residuos Chaqueta Blanca”**, resolviéndose que dicho proyecto no debe ingresar al SEIA, ya que no modifica sustancialmente la extensión, magnitud y duración de los impactos ambientales, no reuniendo los requisitos contemplados en el artículo 10 de la Ley 19.300 y artículo 3 del RSEIA..

11.- Que por Resolución **Exenta N° 0130/2019**, de fecha **3 de junio de 2019**, emanada de la Directora Regional (S) del Servicio de Evolución de Impacto Ambiental, Región de Antofagasta, Sra. Daniela Luza Rojas, se resuelve consulta realizada el representante de Consorcio Santa Marta S.A., respecto de la pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto **“Modificación de detalles técnicos menores”**, consignándose en su resuelvo que dicho proyecto no debe ingresar al SEIA, ya que no modifica sustancialmente la extensión, magnitud y duración de los impactos ambientales del proyecto, no reuniendo los requisitos contemplados en el artículo 10 de la Ley 19.300 y artículo 3 del RSEIA.



12.- Que por Resolución **Exenta N° 0647/2016**, de fecha **16 de agosto de 2016**, de la SEREMI de Salud Región Antofagasta, se aprobó el proyecto de la I.M. de Antofagasta de un *sitio de almacenamiento provisorio de residuos industriales peligrosos*, con ubicación en el kilómetro 6, ruta 26, Lote 3ª, Sector Chaqueta..

13.- Que por Resolución **Exenta N° 702/2016**, de fecha **26 de agosto de 2016**, expedida por SEREMI de Salud Región Antofagasta, Departamento de Acción Sanitaria, se aprobó el proyecto de un Sistema de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos y de Aguas Servidas Domésticas, en la etapa de operación, en el marco del Proyecto “Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios Comuna de Antofagasta” para la Empresa Consorcio Santa Marta, en las instalaciones ubicadas en el Km. 6, Ruta 26, Lote 3ª, Sector Chaqueta Blanca, Comuna y Región de Antofagasta. Se especifica en el resuelvo 2.2. que *“La planta se habilitará exclusivamente para el tratamiento de las aguas servidas domésticas generadas por el personal durante la fase de operación; como asimismo, para el tratamiento de riles provenientes de las actividades de lavado de superficies y de lavado de camiones recolectores”*.

14.- Que en la **Resolución Exenta N° 559** de fecha **7 de julio de 2017**, expedida por el Departamento de Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, se autorizó el funcionamiento de un Sistema Particular de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable para abastecer las instalaciones sanitarias en etapa de operación en el marco del proyecto “Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios Comuna de Antofagasta, perteneciente a la Empresa Consorcio Santa Marta S.A., ubicado en el Km. 6, Ruta 26,, Lote 3ª, Sector Chaqueta Blanca, Comuna y Región de Antofagasta.

15.- Que en la **Resolución Exenta N° 560**, de **7 de julio de 2017** emanada del Departamento de Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, se autorizó el Funcionamiento de un Sistema de disposición y tratamiento de aguas servidas para las instalaciones sanitarias del proyecto detallado en el punto anterior, para las fases de operación y construcción del centro de tratamiento.

16.- Que en la **Resolución Exenta N° 561** de fecha **7 de julio de 2017**, también dictada por el Departamento de Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, se autorizó el funcionamiento de



un Sistema Particular de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable para abastecer las instalaciones sanitarias del área de control de acceso en el marco del proyecto sindicado, para las fases de construcción y operación del centro de tratamiento, perteneciente a Consorcio Santa Marta S.A.

17.- Que en la **Resolución Exenta N° 562**, de igual fecha y autoridad sanitaria indicada en el punto anterior, se autorizó el funcionamiento de un Sistema de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos y de Aguas Servidas Domésticas, en la etapa de operación, en el marco del mismo proyecto en referencia, para las instalaciones de Consorcio Santa Marta en el Km. 6, Rutas 26, Lote 3ª, Sector Chaqueta Blanca, de Antofagasta.

18.- Que en la **Resolución Exenta N° 586 de 11 de julio de 2017** del Departamento de Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, se autoriza el funcionamiento del relleno sanitario, cuyo sitio se utilizará para la disposición final de residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos generados por la comunidad de Antofagasta, el que es parte del centro de tratamiento.

19.- Que en la **Resolución Exenta N° 604, de 17 de julio de 2017** del Departamento de Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, se autoriza el funcionamiento de la Planta de Recuperación y Reciclaje de Residuos sólidos domiciliarios y asimilables en el sector en denominado Chaqueta Blanca, a la salida nororiente de Antofagasta.

20.- Que por medio de la **Resolución Exenta N° 1129, de fecha 8 de marzo de 2018** del Departamento de Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, se rectificó la **Resolución N° 562** de la misma autoridad, de fecha 7 de julio de 2017, que a su turno autorizó un sistema de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos y de Aguas Servidas Domésticas, para la etapa de operación del centro de tratamiento, eliminándose de ella *el tratamiento de lixiviados provenientes del Relleno Sanitario de la Comuna de Antofagasta*".

21.- Que consta en la **Resolución Exenta N° 5162, de 19 de octubre de 2018**, expedida de igual forma por el Departamento de Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, que se modificaron las Resoluciones 4864 de 2018 y 586 de 2017, decisiones administrativas vinculadas, la primera, a la modificación del proyecto del relleno sanitario para la disposición final de residuos domésticos y asimilables a domésticos generados por la comunidad de Antofagasta y, la segunda, con la autorización de funcionamiento de un relleno sanitario para



la disposición final de residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos generados por la comuna de Antofagasta.

Además, se fija un plazo de **60 días** a la concesionaria para la implementación de la piscina de acumulación de lixiviados, contemplada en el proyecto “Ajuste de tamaño de piscina de acumulación de lixiviados Centro de Tratamiento de Residuos Chaqueta Blanca”, que forma parte del Diseño del Sistema de Manejo y Tratamiento de Lixiviados, aprobado por Resolución Exenta N° 4864, dictada por la misma autoridad, que modificó el proyecto del relleno sanitario para la disposición final de residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos generados por la comunidad de Antofagasta, lo que es parte del proyecto del centro de tratamiento.

22.- Que en la **Resolución Exenta N° 366/2016**, de **18 de julio de 2016**, emanada del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Antofagasta, se resolvió informar favorablemente la solicitud N°1834530 con fecha 24 de Abril de 2016, para Informe Favorable para la Construcción (IFC) del Proyecto Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios Comuna de Antofagasta, presentada por el Sr. Rodolfo Bernsteing G. Gerente General Consorcio Santa Marta S.A.

23.- Que en el **Ordinario N° 02456**, de **13 de abril de 2018**, emanado de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas que certifica la correcta ejecución de las obras “Acceso Provisorio al Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a domiciliarios, comuna de Antofagasta”, en Km. 10.270, lado derecho de la Ruta 26.

24.- Que en el **Ordinario N° 484**, de **12 de octubre de 2018**, expedido por la Dirección de Obras Hidráulicas, se aprobó el estudio de Ingeniería de Detalles al Manejo de Aguas Lluvias del Relleno Sanitario Chaqueta Blanca, recomendándose el aumento a no más de 1 m en el diámetro de esa obra de alcantarillado que atraviesa la quebrada por donde drena el canal sur.

25.- Que por medio de la **Resolución Exenta N° 333** (28 de diciembre de 2018) la Dirección General de Aguas de la Región de Antofagasta aprobó y autorizó a Consorcio Santa Marta S.A. la modificación de proyecto original “Centro de Tratamiento y Disposición final de Residuos sólidos domiciliarios y asimilables comuna de Antofagasta, II Región, Chile, obras asociadas al PAS 156”, referido a Alcantarilla identificada como Q3 en



la Res. D.G.A., Región Antofagasta N° 327 (excenta) de 2017, ubicada n la comuna, provincia y región de Antofagasta.

26.- Que por medio de la **Resolución Exenta N° 334, de 28 de diciembre de 2018**, la Dirección General de Aguas de la Región de Antofagasta, aprobó la modificación del proyecto Centro de Tratamiento y Disposición final de Residuos sólidos domiciliarios y asimilables comuna de Antofagasta, II Región, Chile, obras asociadas al PAS 157 del proyecto, en relación con la Res D.G.A. Región de Antofagasta N° 354 (Exenta) de 2017.

27.- Que en el Acta de Inspección Notarial, de fecha **20 de agosto de 2018**, la Notario Público doña Camila Jorquiera M., señala que, a solicitud del encargado de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa Consorcio Santa Marta y en compañía del Administrador del Contrato, se constituyó en la Ruta 26, kilómetro 11, Lote 3-A, Sector Chaqueta Blanca de Antofagasta, con el objeto de verificar el estado actual de las instalaciones, obras de construcción, pavimentación, certificaciones viales, letreros, señaléticas de tránsito y relleno sanitario, pudiendo constatar lo siguiente:

- Que en el ingreso a las instalaciones pudo apreciar un letrero que enuncia *“Bienvenidos al Centro de Tratamiento de Residuos Chaqueta Blanca”*, observando en su recorrido un camino pavimentado en su totalidad, con señaléticas viales de tránsito, letreros de información; garita de acceso, una Báculo de Pesaje que esta al ingresar al lugar, luminarias, instalaciones de galpones con oficinas administrativas y servicios higiénicos, tofo lo cal consta en fotografías allegada al Acta.

- Que siguiendo el recorrido, observó – según lo que le indica administrador del contrato – una Planta de Taller Mecánico, una Planta de Lavado de Camiones, una bodega de residuos peligros, una Planta de Separaciones y Reciclajes donde se encuentran los contenedores de Basuras. También hay fotografías

- Que pudo observar Gaviones en el piso y un Relleno Sanitario, los cuales son de materiales geotextiles, según lo indicado por el Administrador.

28.- Que en el **Oficio Ord. N° 015/2019**, de fecha **10 de enero de 2019**, remitido del Director de Obras Municipales de la I.M. de Antofagasta Sr. Juan Gálvez Barnechea, al Sr. Intendente, Gobierno Regional de Antofagasta, en primer término, por medio de una tabla explicativa, dicho Director detalla el porcentaje de las partidas del proyecto que faltaban por ejecutar por la empresa contratista Consorcio Santa Marta - según itemizado del presupuesto desglosado aprobado por el GORE -, en el que si bien se observa que la mayoría de los ítems del mismo no presentan observaciones



y se encontraban cumplidos al 100%, en la parte final del documento se expresa: *“Mediante lo señalado anteriormente, es preciso indicar que esta Unidad Técnica velando por el fiel cumplimiento de la obra, reitera que la empresa debe dar cumplimiento a lo diseñado y aprobado en el 1ª Etapa, Bases Técnicas y Planos con Permisos de Edificación, Resolución de Calificación Ambiental y Permisos Ambientales Sectoriales. A la fecha, aún existen partidas sin terminar, por lo tanto, **NO DISPONE DE RECEPCIÓN PROVISORIA**, No está finalizada la Etapa de Construcción según las Bases Técnicas, Pto. 10, Ítem (10.1), Recepción Provisoria y posterior Marcha Blanca y (10.2) Recepción Definitiva Centro de Tratamiento y Disposición Final. Además, **NO SE DA CUMPLIMIENTO AL CONTRATO** en su Pto. (2) Construcción y Puesta en Marcha, en donde se indica: **“finalizada la etapa de construcción, y realizado el proceso de recepción de obra, el oferente adjudicatario deberá iniciar la Puesta en Marcha y Marcha Blanca del Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Asimilables”**.*

*No obstante, lo indicado anteriormente la obra **NO DA CUMPLIMIENTO** a los artículos N° 5.2.6 y 5.2.7 de O.G.U.C. por lo que **NO PUEDE ENTRAR EN FUNCIONAMIENTO Y/O USO**.*

*Por último, esta Unidad Técnica informa que el término legal aprobado por la autoridad edilicia según decreto N° 1303/2018 ex., de fecha 22 de agosto, deja establecido el día 20 de agosto de 2018. En consecuencia, a contar del 21 de agosto de 2018, se encuentra en curso multa según Bases Administrativas Especiales. Pto. 21.2 Etapa de Construcción, ítem: **“Por incumplimiento de Plazo Ofertado, por cada día de atraso en la entrega de la obra, el concesionario incurrirá en una multa equivalente al 1,5% del monto del contrato destinado a la construcción”**.*

A lo anterior, cabe adicionar que como medida para mejor resolver se agregaron al proceso los siguientes documentos:

a) Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación N°10102/2020, de **16 de enero de enero de 2020**, emanado de la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta en virtud de las atribuciones emanadas de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el que consta que se otorgó la recepción definitiva total al relleno sanitario Chaqueta Blanca, con una superficie de 1.766,93 m², propiedad de la I.M. de Antofagasta,



b) Acta emanada de la IM.A. de Antofagasta, de fecha **26 de junio de 2020**, la que da cuenta de la **Recepción Definitiva de los Trabajos** denominados “Centro de tratamiento y disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, comuna de Antofagasta, II Región, Chile”, Código BIP 30109379-0 ID 2430-55-LP14, otorgado por los funcionarios firmantes de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta que allí aparecen detallados conjuntamente con el Gerente General del Consorcio Santa Marta SA..

Consta en este instrumento, en su punto N° 2 señala ***“La obra en referencia fue recepcionada por la Dirección de Obras Municipales a entera satisfacción, habiendo dado el contratista fiel cumplimiento a los términos establecidos en para la ejecución de los trabajos”***

29°.- Que del Resumen Ejecutivo del Informe Final N° 242 de 2018, emitido por la Contraloría Regional de la República, sobre *“Auditoría al Contrato de Diseño y Construcción del Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Asimilables de la Comuna de Antofagasta”*, remitido a la Sra. Alcaldesa de la comuna, se debe dejar consignado que en su parte inicial, el el título ***“Objetivo”*** se expresa lo siguiente: *“Verificar que el contrato de concesión de las obra de diseño y construcción del Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, Comuna de Antofagasta, denominado “Relleno Sanitario Chaqueta Blanca” suscrito entre la Municipalidad de Antofagasta y el Consorcio Santa Marta S.A., financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se haya ceñido a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que regularon dicho contrato. Así como también, validar los gastos efectuados, verificando la autorización, registro contable y existencia de la documentación de respaldo de las operaciones, durante el periodo comprendido entre el 15 de abril de 2015, a la fecha de finalización de las visitas a terreno, acontecido en el mes de enero de 2019”*

Cabe destacar, entre otros, los puntos que a continuación se transcribe:

- *Se comprobó que la entidad edilicia no cursó multas ascendentes a \$31.663.321 , por la ausencia del profesional residente en el proyecto, durante la etapa de construcción, y por \$ 946.733.291, por el incumplimiento del contratista a las instrucciones impartidas por la Inspección Técnica de Obras, en los plazos 'señalados por esta. Sobre el particular, corresponde que la jefatura comunal remita a esta Sede Regional, en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción de este informe final, los antecedentes que acrediten el cobro de estas multas. Vencido dicho término sin que se*



haya dado cumplimiento a lo requerido, se formulará el reparo correspondiente ante el Juzgado de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 95 y siguientes de la citada ley N° 10.336, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 del mismo texto legal. En adelante, la entidad edilicia deberá establecer las respectivas medidas de control para efectuar una mayor y mejor fiscalización durante la ejecución de las obras, con el fin de que los inspectores técnicos de los proyectos consignen y cobren las multas oportunamente, velando así por los intereses del servicio y el cumplimiento de las normas que rigen los contratos de obra.

- Se verificó que la recepción de la etapa de diseño del proyecto fue autorizada sin contar con un diseño definitivo aprobado por la Dirección de Obras Municipales -DOM-, ni con los permisos ambientales sectoriales mixtos de los organismos técnicos aprobados, requisitos exigidos en las bases administrativas especiales y técnicas. Por lo descrito, el municipio deberá arbitrar las medidas necesarias para garantizar en lo sucesivo, el estricto cumplimiento de las condiciones previstas en los contratos que suscriba.

- Se advirtió que la Sociedad Concesionaria inició trabajos con una antelación de 102 días corridos previos a la entrega del terreno, por lo que se ejecutaron faenas sin supervisión y fiscalización de la Municipalidad de Antofagasta, y se originó una situación de privilegio en favor de la primera, por el mayor tiempo a disposición para la ejecución de obras, atentando contra los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. Al respecto, ese municipio, en futuros contratos, debe cumplir cabalmente con su obligación de supervigilar y fiscalizar el correcto desarrollo de los mismos.

- Se comprobó que se inició la construcción del relleno sanitario sin contar con la autorización de la Dirección General de Aguas de Antofagasta, respecto de la modificación de un cauce, incumpliendo lo establecido en los artículos 41 y 171 del Código de Aguas. En relación con este asunto, y tras nuevas indagatorias, se comprobó que el mencionado servicio, mediante las resoluciones exentas N° 333 y 334, ambas de 28 de diciembre de 2018, aprobó la regularización de la citada autorización. En este contexto, la Municipalidad de Antofagasta deberá, en lo sucesivo, establecer los mecanismos y/o acciones necesarias que permitan controlar y supervisar los requerimientos técnicos y ambientales exigidos en los proyectos.

- Se detectó que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta otorgó el permiso de funcionamiento de la primera etapa del



relleno sanitario, en circunstancias que el sistema de drenaje de lixiviados no cuenta con elementos constructivos fundamentales para la evacuación de los líquidos provenientes del recinto hacia 1a planta de tratamiento de RILES, específicamente, la cámara captadora y la tubería de acero. En lo pertinente, y en virtud de las nuevas diligencias practicadas, se evidenció que la SEREMI de Salud de Antofagasta, mediante la resolución exenta N° 4.864, de 28 de septiembre de 2018, autorizó la modificación del manejo de los lixiviados objetado por este Organismo de Control, sin embargo y sin perjuicio de lo anterior, esa repartición pública deberá, en el futuro, arbitrar las medidas necesarias para evitar la aprobación de actos administrativos que presentan incoherencias técnicas entre las obras ejecutadas y lo autorizado en las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental.

- Se evidenció que, entre la fecha de ingreso de la solicitud del permiso de edificación del proyecto y la data de emisión del acta de observaciones por parte de la Dirección de Obras Municipales, transcurrieron **111 días corridos**. En contravención al plazo dispuesto en los artículos 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 1.4.1 O de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Por su parte, se determinó que las obras de construcción fueron iniciadas por la empresa contratista sin contar con el permiso de edificación, el cual fue obtenido cuando las obras presentaban un 66% de avance, infringiendo lo dispuesto en el artículo 116 de la primera norma indicada. En dicho contexto, corresponde que la autoridad comunal ordene las medidas pertinentes para que en lo sucesivo se dé cabal cumplimiento a la normativa que rige dicha materia.”

De otra parte, se debe consignar que conforme oficio de **7 de marzo de 2019**, del reseñado órgano fiscalizador, se expresa en la parte donde dice “**UNIVERSO Y MUESTRA**”, que “De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el GORE, se determinó que, al 30 de abril de 2018, dicha entidad había pagado por concepto de diseño y construcción del Relleno Sanitario Chaqueta Blanca, a la empresa Consorcio Santa Marta S.A., la suma total de \$3.274.538.012, equivalente a ocho (8) estados de pago, los cuales fueron revisados en su totalidad. según se muestra en la tabla 1 que sigue y cuyo detalle pormenorizado se incluye en el anexo N° 1.”

Además, de la Tabla N° 1 allí contenido, se desprende que los estados de pago de las etapas de Diseño y de Construcción, habrían sido solucionados en un 100% debiendo precisarse que en el primero caso, se



habían pagado 2 estados de pago y, en relación al segundo, 6, por un total de \$293.085.676 y \$2.981.452.336, respectivamente.

30.- Que, al evacuar el informe respectivo – folio 120 - , el perito don José Luis Durán Aros, en la parte conclusiva de éste, indica: *“...podemos concluir que el proyecto estaba en condiciones de iniciar su operación y puesta en servicio en el mes de agosto de 2018. Para eso, la marcha blanca podía haberse realizado en el mes de junio de 2018. Esto, tras haberse entregado la revisión 1 (REV1) por parte de Consorcio Santa Marta a la Dirección de Obras Municipales de IMA, de los planos definitivos (as built), necesarios para la revisión final de la obra. Además, y sobre todo pensando en el problema sanitario que se estaba generando en la ciudad de Antofagasta, por el posible cierre, en esos tiempos, del vertedero la chimba.*

Cabe hacer notar, que lo exigido y aprobado en la etapa de diseño, fue modificado para poder contar con la aprobación de los organismos sectoriales en la etapa de construcción, debido a las exigencias de varios organismos sectoriales tales como, SEREMI de Salud, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas, MOP, SAG, dirección de Obras Hidráulicas, etc, logrando variar de manera significativa, lo presentado en una primera oportunidad y con el cual se tramitó en primera instancia el permiso de construcción de las obras. Es por esto, que una vez concluidos los trabajos de construcción por parte del Consorcio Santa Marta, este, no cumplía con los antecedentes presentados al momento de la solicitud del permiso de construcción, por lo que había que presentar, los planos y proyecto modificado para que fueran aprobados por Secoplan, con el fin de que ellos presentaran un informe al GORE, para dar a conocer el cambio de diseño, que no significó un mayor costo de las obras, pero si una demora en tiempos y una mejora en cumplir con las leyes y normativas vigentes.

Ya con estas modificaciones aprobadas, se solicitó la recepción provisoria, logrando en el mes de julio de 2020, la recepción definitiva de las obras. Con esta recepción aprobada, recién Consorcio Santa Marta, pudo solicitar la patente comercial en el departamento de rentas a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, quien no accedía a esa solicitud, porque la obra no contaba con recepción de obras definitiva y por no contar con zonificación definida, por estar fuera del plano regulador.

Todas las razones esgrimidas por la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, son muy validas y tienen un trasfondo legal acreditado, pero sólo ellos, son los que pueden dar aprobación, en todas las etapas del proyecto, es decir, diseño y rediseño, a través de Secoplan, permiso de



construcción por parte de Dirección de obras municipales, autorización de cambios en obra a través de departamento de ejecución de obras, dependiente de DOM, recepción provisoria y recepción final de las obras por parte de la dirección de obras municipales y tramitación de patente municipal ante el departamento de rentas de la municipalidad de Antofagasta. En consecuencia, si uno de estos organismos municipales, demoraba más en su tramitación, la obra no podía continuar en su trámite normal como lo exigían las bases de la licitación y el contrato firmado por ambas partes, siendo que muchas veces el cambio requerido, se debía a un cambio de diseño exigido para aprobación del proyecto final, por parte de los organismos sectoriales intervinientes. Un punto importante a analizar, es el poco conocimiento que tenían las partes involucradas en este proyecto, por existir muy pocos proyectos, tan relevantes y de estas mismas características a nivel país, por lo que no había muchos puntos de comparación, para poder definir ciertos hitos del proceso y del proyecto en general.”

31.- Que en folio 88, los testigos de la demandante, señores Osvaldo Guzmán Briones; Pedro Eduardo Rivas Valdivia; Patricio Andrés Ossandon García, y Tomás Eduardo Gálvez Salas, prestaron declaración a los puntos de prueba de la interlocutoria de folio 31, complementados por los de folio 42.

32.- Que, asimismo, y finalmente, se tuvo a la vista la causa Rol C-2368-2019 del Segundo Juzgado de Letras de esta ciudad y las causas seguidas ante la Illma. Corte de Apelaciones, cuyos Roles Ingreso Corte son N° 1014-2019 y 108-2020.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, resulta conveniente precisar en primer término, que se desprende de la prueba rendida – sin perjuicio de no encontrarse controvertido por las partes de este juicio - , que con fecha 17 de abril de 2015 celebraron un contrato a suma alzada por la Concesión Municipal del Centro de Tratamiento y Disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables de esta comuna, en el terreno municipal denominado “Chaqueta Blanca” , ubicado en el kilómetro 6 de la Ruta A26, Lote 3, pacto en el que la Municipalidad demandada actuó como mandataria del Gobierno Regional conforme a mandato suscrito por ambos el 23 de agosto de 2012, estipulándose en el primer contrato que el mismo se sujetaría a las disposiciones de la Ley 19.886 sobre compras públicas, sus principios y reglamentos, aclaraciones y respuestas emitidas por la Municipalidad, las bases administrativas generales, bases técnicas y anexos,



supletoriamente por las normas del derecho común, y en su defecto, por las normas del derecho privado, por las estipulaciones del contrato en referencia y la oferta de la empresa, debiendo agregarse que en las bases administrativas especiales, se consignó que para su interpretación se emplearían, según el siguiente orden de prelación; primero el texto de las bases en referencia, las bases técnicas, sus anexos y aclaraciones emitidas por la IMA, para luego acudir a la oferta presentada como al contrato, añadiéndose en el punto número 7 de las mismas – normas que rigen la licitación –, que la licitación pública que precedió este vínculo contractual entre las partes, su consecuente adjudicación y contratación se regirían por el artículo 8 de la Ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades, y por la citada Ley 19.886 sus principios y su reglamento, bases administrativas especiales, bases técnicas, anexos, estudios, las aclaraciones y respuestas a las consultas si las hubiera que emita la Municipalidad, y por el contrato, para reiterar que supletoriamente se aplicarían las normas de derecho público, y, en defecto de ellas, las normas de derecho privado.

En esta parte, conveniente resulta indicar, que, de acuerdo fue estipulado en el contrato reseñado, éste tenía por objeto el diseño, construcción, operación y cierre del ya reseñado Centro, precisándose que en el citado proyecto consideraba el desarrollo de distintas etapas, a saber, Diseño del proyecto; Construcción y puesta en marcha; Operación normal del proyecto; y Plan de cierre y abandono.

En cuanto a la primera de ellas, el concesionario debía considerar en su desarrollo, una serie de especificaciones, particularmente con el diseño del proyecto, diseño arquitectónico, ingeniería estructural, Ingeniería Vial, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería sanitaria, ingeniería de control y comunicaciones y otros, lo que debía ser desarrollado de acuerdo a la oferta, debiendo respetarse la programación y planificación de la etapa contenida en la Carta Gantt, a lo que debe sumarse que se le impuso a la empresa concesionaria, previo al inicio de la construcción del proyecto, obtener la resolución de calificación ambiental favorable del mismo y realizar las modificaciones requeridas por las autoridades sectoriales. Importante resulta en este punto transcribir lo pactado en la estipulación tercera del contrato, la que señala: *“Terminada la etapa de Diseño, obtenida la Resolución de Calificación Ambiental favorable, los Permisos Ambientales Sectoriales y la aprobación definitiva del proyecto por la contraparte técnica, la empresa podrá dar inicio a la Etapa de Construcción del “Centro de*



Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables”.

La empresa concesionaria deberá entregar a la inspección técnica tres copias completas de la totalidad de los antecedentes de cada uno de los Permisos Ambientales Sectoriales.

- Resolución de Calificación Ambiental**
- Declaración de Impacto Ambiental aprobada por el SEA**
- Diseño Definitivo aprobado por la Dirección de obras Municipales.**

El que deberá incluir, Diseño Arquitectónico, Ingeniería Estructural, Ingeniería Vial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Sanitaria de Control y Comunicaciones con sus respectivas Especificaciones Técnicas y Memorias de Cálculos, todos ellos indicados en las Bases Técnicas.

Además, deberá entregar una programación detallada de las etapas sucesivas, Construcción y Operación.

Permisos Ambientales Sectoriales Aprobados por los respectivos sectores.”

Sumado a lo anterior, se debe syndicar que tal como aparece en la página número uno del Libro de Obra I, el terreno antes descrito, le fue entregado a Consorcio Santa Marta S.A. con fecha 9 de agosto de 2016, existiendo en la hoja dos, constancia de autorización municipal para la ejecución de obras preliminares – instalación de faenas y excavaciones en el sector de “Chaqueta Blanca” - otorgado específicamente por la Dirección de Obras Municipales, con fecha 21 de julio de 2016, precisándose en la página número 4 (9 de agosto de ese año) que se habría hecho entrega del terreno en la fecha anteriormente indicada, para la ejecución de movimientos de tierra, debiendo añadirse que ello figura en el OF. 726/2016 del 3 de agosto de 2016 por el cual el Secretario Comunal de Planificación - SECOPLAN - informa al Director de la Dirección de Obras Municipales que fue revisado por dicha unidad el proyecto de marras, considerado que éste cumplía con los requisitos necesarios para llevar a cabo la etapa de ejecución del proyecto, haciendo presente que para la aprobación de la etapa de diseño, la empresa debía presentar permiso de construcción y permisos sectoriales, destacándose en el mismo documento que “durante la etapa de construcción cualquier modificación y/o cambios deberá quedar reflejado en los respectivos libros manifold y planos as-built.”



En conclusión, conforme al mérito del proceso y lo aseverado por el demandado en su contestación de la demanda, no estaría controvertido que la ejecución del proyecto sobre el que versa el contrato celebrado entre las partes, habría culminado satisfactoriamente en su primera fase de diseño, a lo menos el 26 de agosto de 2016, lo que debía producirse al darse por terminada esta etapa, por contarse con la resolución de calificación ambiental favorable, permisos ambientales sectoriales y la aprobación del diseño original por la Dirección de Obras Municipales – sin perjuicio de lo concluido por la Contraloría Regional en el punto 8.1 del informe final N° 242/2018 - comenzándose acto seguido, con la etapa de construcción, siendo demostrativo de ello el acta de entrega de terreno, que conforme a lo que aparece en la página uno del Libro de Obras Número I, ocurrió el 9 de agosto de aquel año, dándose inicio formalmente a las obras que comprendían esta etapa, de acuerdo a la autorización de obras preliminares y/o demolición, agregado en la hoja dos del citado Libro, el 21 de julio de 2016, sin perjuicio de hacerse presente, que conforme aparece en las primeras anotaciones de este libro la empresa demandante, de manera previa a la reseñada entrega formal, había comenzado a ejecutar dichas obras, siendo palmario de ello, el detalle incorporado en la foja 11 del mismo libro, donde consta que a partir del 2 de mayo de 2016 la contratista comenzó con el traslado de equipos a la obra.

Cabe añadir, que no se encuentra cuestionado por las partes que durante la etapa de construcción debido a los requerimientos efectuados por los organismos sectoriales, se incorporaron al proyecto original, diversas modificaciones con la finalidad de dar cumplimiento a ellas, que en definitiva, generó que estas debiesen ser aprobadas por su contraparte técnica, lo que conllevó a atrasos de ésta, en especial en la aprobación del diseño definitivo del proyecto o en su defecto, que permitir que se hiciera entrega de los planos as-built como parte del procedimiento de recepción de la obra, debiendo en consecuencia, determinarse si en ello existe o no una falta en el servicio prestado por la Ilustre Municipalidad de Antofagasta como órgano integrante de la maquinaria estatal.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en cuanto a la acción intentada, cabe mencionar primeramente que el sistema de responsabilidad extracontractual del Estado actualmente vigente en nuestro país, - cuyas normas rectoras se encuentran en el artículo 38 de la Constitución Política de la República y los artículos 4 y 44 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -, reconoce como fundamento la



noción de falta de servicio, la que se encuadra en la categoría de responsabilidad por culpa de la Administración, y asimismo tratándose de responsabilidad extracontractual edilicia lo mandado en el artículo 152 inciso primero de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el que prescribe lo siguiente: *“Las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio.”*

Por otra parte, resulta útil tener presente en este punto, lo sostenido ya reiteradamente por nuestro máximo tribunal de justicia, al señalar que *“la falta de servicio no es una responsabilidad objetiva, sino subjetiva, basada en la falta de servicio, en la que aquella, considerada como “la culpa del servicio”, deberá probarse por quien alega el mal funcionamiento del servicio, el funcionamiento tardío o el no funcionamiento del mismo, que esta omisión o acción defectuosa haya provocado un daño al usuario o beneficiario del servicio público que se trata; y en fin, que la falla en la actividad del ente administrativo haya sido la causa del daño experimentado, todo por disponerlo así el artículo 42 de la citada Ley de Bases de la Administración del Estado”*. (Corte Suprema, Rol 10.240-2015, considerando noveno).

Idéntica posición ha adoptado nuestra Corte de Apelaciones de Antofagasta, al señalar que: *“De ser cierta la alegación del fisco en orden a que la responsabilidad del estado ha sido entendida por el Tribunal inferior como una de carácter meramente objetiva, habría bastado para aquel tener por configurada la relación de causalidad para asignar responsabilidad extracontractual al Estado, prescindiendo absolutamente del examen de la culpa de la Administración”*. (Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol Corte 401-2016, considerando segundo). Por otro lado, este mismo fallo deja asentando el régimen normativo aplicable a este tipo de casos, al señalar que *“...debe darse preminencia a la normativa constitucional y aquella de la Ley de Bases de la Administración del Estado que resultan aplicables, por sobre aquellas de carácter general, por lo que en consecuencia, existiendo un ámbito debidamente delimitado para tratar de la responsabilidad extracontractual del Estado, con normas y principios propios, debe estarse a éste antes que al supletorio”* (considerando tercero, fallo citado).

VIGÉSIMO QUINTO: Que, de lo anteriormente reseñado, cabe concluir que la responsabilidad municipal encuentra su regulación en nuestra carta fundamental, en la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado y en la Ley Orgánica Constitucional de



Municipalidades por lo que quien pretenda hacer efectiva la responsabilidad de los órganos de ésta, deberá acreditar el mal funcionamiento del servicio, lo que implica efectuar un reproche al actuar de la Administración, siendo los presupuestos de esta responsabilidad, los siguientes:

- 1° Haber incurrido el órgano estatal – Municipalidad - en una falta de servicio;
- 2° Que la falta de servicio haya producido un daño al administrado y,
- 3° Que exista una relación de causalidad entre el daño y la falta de servicio.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, corresponde entonces analizar los elementos de la responsabilidad de la Administración y determinar si existió falta de servicio por parte de la demandada como órgano de la administración del Estado.

Al respecto, cabe tener presente que dentro de la responsabilidad patrimonial del Estado, se encuentra la responsabilidad por falta de servicio, la cual tiene su basamento legal en el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, que prescribe: *“el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones”*.

Por otro lado, nuestra Excm. Corte Suprema, ha señalado reiteradamente el concepto de falta de servicio, indicando que *“la falta de servicio se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del Servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente”*. (Corte Suprema, Rol 2743-2015, considerando octavo).

De esta forma, la falta de servicio opera como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria, la cual se produce si alguno de los órganos administrativos no actúa debiendo hacerlo, si su actuación es tardía o defectuosa, causando perjuicios a los usuarios o destinatarios del servicio público, debiendo estos últimos invocar y acreditar la existencia de esta falta y que la misma causó daño a la persona afectada. Esta proposición encuentra consagración positiva en el artículo 42 de la citada Ley, que indica que *“los órganos de la Administración del Estado serán responsables del daño que causen por falta de servicio”*.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en este orden de ideas y, en cuanto al **primer requisito** anotado en el motivo vigésimo quinto, esto es, **haber**



incurrido el órgano estatal en una falta de servicio, corresponde analizar cada una de las alegadas en el libelo pretensor.

En relación primera falta de servicio alegada por la demandante, consistente en la negativa injustificada de aprobar el diseño definitivo y/o los planos asbuilt, deben hacerse las siguientes precisiones.

En folio 14, la parte demandante cumpliendo lo ordenado por este tribunal precisó en cuanto a la primera falta de servicio que lo que peticiona es lo siguiente: “*La negativa injustificada por parte de la IMA de aprobar el diseño definitivo del proyecto denominado “Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios Comuna de Antofagasta”, o en su defecto, de permitir que se haga la entrega de los planos as-built, como parte del procedimiento de recepción de la obra, dentro de los trámites necesarios para cualquier persona que requiere iniciar el procedimiento de recepción de cualquier obra ante una entidad municipal.*”, de lo que se desprende que la alegación es más bien de carácter eventual, porque en caso de desestimarse la primera debiese acogerse – en su caso – la segunda.

Como primera cuestión, sin perjuicio que el libelo de autos se fundamenta en la falta de servicio en la que habría incurrido la demandada en este punto, conveniente resulta reseñar lo consignado en las **Bases Técnicas de la Licitación**, las que en lo controvertido, señalan lo siguiente: “**5.2 Construcción y Puesta en Marcha.** Conforme a la propuesta de la empresa seleccionada en Oferta Técnica y antecedentes presentados ante la Autoridad Competente refrendado con la Resolución de Calificación Ambiental, los Permisos Ambientales Sectoriales, y la aprobación de la etapa de Diseño, la empresa adjudicada con el **Contrato de Concesión** deberá comenzar la construcción e implementación del “Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables” para la comuna de Antofagasta.”

Añadiéndose que: “Finalizada la etapa de construcción, y realizado el proceso de recepción de obra, el oferente adjudicado deberá iniciar la Puesta en Marcha y Marcha Blanca del “**Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables**”. Esta etapa, considera la prueba de los equipos y la capacitación del personal operativo. Inicialmente se dará marcha blanca para aplicar todos los ajustes necesarios que deberá implementar el adjudicatario. Estos períodos deben señalarse expresamente en el Cronograma o Carta Gantt adjunto a la propuesta técnica.”



Cabe sumar a lo anterior, que en cuanto a la recepción de los trabajos de construcción, en lo vinculado a la recepción provisoria del Centro de Tratamiento y Disposición Final, se indica - en las señaladas bases - lo siguiente: “**10. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN**

10.1. Recepción Provisoria Centro De Tratamiento y Disposición Final.

Una vez finalizada la Etapa de Construcción del "Centro de Tratamiento y Disposición Final Residuos de Sólidos Domiciliarios y Asimilables" de la comuna de Antofagasta, la empresa a cargo del Contrato de Concesión deberá entregar la solicitud de recepción provisoria de obra a la Inspección Técnica Municipal, la que deberá acompañar con los siguientes documentos:

- a) Carta Solicitud de Recepción.*
- b) Planos Definitivos de Construcción*
- c) Certificado de Recepción SEC, Proyecto Eléctrico.*
- d) Certificado de Recepción AA y/o SS, Proyecto Sanitario.*
- e) Libro de Obras*
- f) Certificados de Calidad Respectivos (Se indican en Bases Técnicas).*

Dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles a contar de la fecha de solicitud de recepción provisoria, el mandante procederá a nombrar una comisión de recepción, compuesta por profesionales idóneos para el efecto, y llevar a cabo la recepción provisoria del proyecto, proceso que no podrá exceder de los 10 días a partir del nombramiento de la Comisión de Recepción.

Terminada la recepción provisoria, se levantará un acta donde se dejará constancia de todas las observaciones detectadas por la Comisión de Recepción, sean ésta fallas de Construcción y/o Diseño, y la empresa tendrá un plazo determinado por la Comisión.

Una vez realizada la recepción provisoria la Comisión determinara si es posible con las observaciones establecidas dar inicio a la etapa de Marcha Blanca, en caso de ser posible, las observaciones deberán ser resueltas dentro del plazo establecido de Marcha Blanca.

En caso contrario la Comisión determinara el tiempo establecido para resolver las observaciones y dar inicio a la etapa de Marcha Blanca.”

En cuanto a las **Bases Administrativas Especiales**, se indicó en lo referente a la etapa de construcción, en su punto 2.2 lo siguiente: “*En esta etapa la Empresa deberá realizar la construcción de las obras*



correspondientes al proyecto, diseñado y ofertado a nivel de detalle, aprobado por los organismos competentes en la etapa de Diseño. Corresponderá a la Dirección de Obras Municipales otorgar el respectivo permiso de construcción, debiendo revisar previamente lo ofertado en forma conjunta con SECOPLAN, con el objeto de verificar la inversión efectuada por el oferente, considerando que los montos a ejecutar tengan plena concordancia con los valores de mercado. Lo anterior, atendido al hecho que los fondos utilizados en esta etapa provienen del FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional).”

En relación a las Unidades Técnicas, se señala: **“20. UNIDADES TÉCNICAS.**

20.1 Conformación de las Unidades Técnicas:

20.1.1 Etapa de Diseño:

- *La Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAN).*
- *La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.*

20.1.2 Etapa de Construcción:

- *La Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAN).*
- *La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.*
- *Departamento de Ejecución de Obras Municipales, dependientes de la Dirección de Obras Municipales.*

20.1.3 Etapa de Operación:

- *La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.”*

Se Indica en el punto 20.2 que dentro de las obligaciones a las que estaban sujetas las Unidades Técnicas, se encontraba, entre otras, la de *“Tramitar la recepción provisoria y definitiva (Sólo en la etapa de Construcción).”*

De otra parte, tal como quedó asentado en un considerando previo, una vez terminada la etapa de diseño, principió la de construcción en el segundo semestre del año 2016 y, debido a las constantes imposiciones efectuadas por los organismos sectoriales, trajo como consecuencia la incorporación al proyecto original de diversas modificaciones con el propósito de dar cumplimiento a ellas, debiendo aquellas ser aprobadas por su contraparte técnica, lo que generó una demora en la aprobación de los planos as-built, lo que en principio habría constituido un impedimento para la recepción provisoria de las obras.

Para contextualizar lo anterior, se debe explicitar que **“planos as-built”** se trata de una expresión del habla inglesa, y que traducida al español significa *“planos de obra determinada y/o planos según construcción”* y, de



acuerdo a un concepto genérico que figura en una búsqueda efectuada en el servidor google, de acceso público -lo que es demostrativo de ser una definición de uso común-, éstos corresponden a un documento técnico que recoge los planos, cálculos y descripciones de las actuaciones realizadas para adaptar el proyecto de construcción inicial a la realidad de la obra construida, añadiéndose que una vez concluida ésta, el constructor o ejecutor debe entregar la correspondiente documentación as-built al organismo técnico correspondiente.

En el caso sublite, se desprende de las bases técnicas, específicamente de sus puntos 5.2 y 10.1 como del contrato de marras, cláusula tercera número dos, que uno de los requisitos indispensables para la recepción de los trabajos de construcción por parte de Consorcio Santa Marta S.A., era que se produjere la Recepción Provisoria del Centro de tratamiento y disposición final, siendo requisito para ello que dicha empresa acompañara a la mandante, Ilustre Municipalidad de Antofagasta, entre otros antecedentes, los planos definitivos de construcción, lo que era necesario para solicitar la recepción provisoria de la obra, que es de competencia de la Inspección Técnica de la IMA.

Por otro lado, se desprende de la documental de folio 51, que con fecha 14 de abril de 2016 SECOPLAN remite al Gerente Técnico de Consorcio Santa Marta S.A. Oficio Nro. 355/2016 indicándole que según lo establecido en los términos de referencia, para la aprobación definitiva del proyecto, etapa de diseño, por la Unidad Técnica - SECOPLAN -, debía hacer entrega de la Resolución de Calificación de Impacto Ambiental, permisos ambientales sectoriales que allí se detallan y permiso de construcción aprobado por la Dirección de Obras Municipales, precisándose en su penúltimo párrafo que en estos antecedentes se deberá considerar la descripción general del proyecto (descripción contenida en la DIA), debiendo dar cuenta de las modificaciones indicadas por los diferentes organismos revisores a través del sistema de evaluación ambiental.

Cabe hacer presente que luego de ello, Santa Marta presentó tres solicitudes de Recepción provisoria de las Obras, a saber, el 16 de junio de 2017, 25 de agosto el mismo año y 24 de enero de 2018, todas las cuales fueron rechazadas por la Dirección de Obras Municipales alegando el incumplimiento de diversas partidas del proyecto original conforme al presupuesto.

Seguidamente, el perito José Luis Durán Araos designado en autos, en su informe agregado en el folio 120, explicitó que estos continuos



rechazos generaron que las partes del contrato con las respectivas Unidades Técnicas asistieran a la reunión celebrada en el mes de enero de 2018, desprendiéndose del acta agregada a folio 51, que la misma se celebró en la Sala de Reuniones de la Municipalidad, constando que en esa oportunidad, la alcaldesa de la época, doña Karen Rojo, planteó a los asistentes (Administrador Municipal, Director Jurídico, Director de Obras municipales, Director de SECOPLAN, Unidad Técnica, Departamento de Comunicaciones de la IMA, y a los Gerentes General, de Operaciones, y Técnicos de Consorcio Santa Marta) la necesidad de resolver de manera urgente los problemas administrativos y técnicos para iniciar cuanto antes la operación del Centro de Tratamiento, acordándose solicitar a la Unidad Técnica, revisar y resolver todos los antecedentes pendientes, señalando el Gerente General de Santa Marta S.A., don Rodolfo Bernstein, que las dificultades administrativas, han impedido que el Centro iniciara operación una vez construida la instalación del empalme como había sido acordado en reuniones anterior, pidiendo se resolviera de manera urgente la situación del estado de pago nro. 5 el que se encontraría pendiente de pago desde mayo de 2017, lo que generó un bloqueo de las cuentas corrientes bancarias de la empresa demandante, lo que fue corroborado por el Administrador Municipal don Héctor Gómez al explicitar la importancia de asumir la responsabilidad de llevar a cabo el proyecto de manera conjunta, sobretodo el hecho que se encontraban otorgadas las autorizaciones y gestionados los pagos, hasta el estado de pago nro. 5. En dicha reunión, el gerente técnico de Santa Marta S.A. don Pedro Rivas, expuso sobre la necesidad de resolver definitivamente los ajustes, errores y/o modificaciones del proyecto, de manera de evitar que se continúen emitiendo oficios de rechazo, sobre aspectos que han sido discutidos y acordados en extensas reuniones de trabajo entre ambas partes, acordándose entregar a la Unidad Técnica los antecedentes de cada partida que requiriera de modificación, aclaración y/o corrección para el análisis y posterior envío a reevaluación ante el Gobierno Regional, debiendo añadirse, que en aquella oportunidad, el Señor Luis Castillo, Director (S) de DOM, en cuanto a la consulta de doña Karen Rojo sobre los temas pendientes de resolver, y sobre las modificaciones que requiere el proyecto, indicó que existían varias partidas en esta situación, acordándose efectuar una revisión de todas las partidas, para avanzar y revisar el tema.

La actora en fecha posterior, 14 de mayo de 2018, entregó al Director de SECOPLAN el Proyecto de Ingeniería Revisión 1, indicándose en



dicha misiva que *“La entrega de este proyecto revisado responde a lo acordado en revisión (sic) sostenida entre ambas partes y su objetivo consiste en incorporar en los planos y en las especificaciones del proyecto, todas aquellas aclaraciones, errores y/o modificaciones a las que se ha visto sometido el proyecto, para efectos de efectuar la Recepción provisoria de la instalación”,* a lo que debe adicionarse, que casi dos meses y medio después, a saber, el 25 de julio de 2018, la alcaldesa de la comuna hizo devolución de estos antecedentes al Gerente General de la demandante en el que se explicitó lo siguiente *“ Indico a Usted que la unidad a cargo de la etapa de construcción corresponde a la Unidad Técnica de la Dirección de Obras Municipales, por lo cual se devuelve proyecto de ingeniería de detalles para que sea derivado a la Unidad respectiva cuando corresponda.”*

Sin perjuicio de lo indicado, en los hechos, conforme se desprende de la causa tenida a la vista (Rol C-2368-2019 del Segundo Juzgado de Letras de esta ciudad), debido al hecho público y notorio consistente en la emergencia sanitaria por la que atravesaba la ciudad provocado por el funcionamiento ilegal del Vertedero La Chimba debido al acopio de residuos domiciliarios, presencia de vectores y quemas ilegales, la autoridad sanitaria, en razón que el proyecto en análisis contaba con permisos ambientales y sanitarios para su funcionamiento, ordenó a la IMA el cierre el vertedero la Chimba y la apertura del Centro de Tratamiento de residuos sólidos domiciliarios denominado “Chaqueta Blanca” mediante Resolución Exenta N° 300 de 18 de enero de 2019, debiendo hacerse presente que en la demanda de dicho proceso, la entidad edilicia argumentó como una de las razones para fundamentar su reclamación lo siguiente: *“ ...si se diere cumplimiento a dicha resolución se daría inicio a la operación de un centro que si bien cuenta con autorización sanitaria de funcionamiento, no cuenta con la Recepción definitiva de las Obras exigidas por la Ley General de Urbanismo y Construcción, vulnerándose con ello el artículo 145 que señala que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total pues uno de los efectos jurídicos que se produce cuando se entrega al uso público una obra sin contar con la debida recepción es lo que se denomina “Recepción Tácita” lo que genera la imposibilidad de exigir a la empresa la subsanación de eventuales observaciones que la Unidad Técnica pudiese verificar y la imposibilidad de exigir el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en el contrato, produciéndose un eventual perjuicio a las arcas fiscales dado que este*



proyecto se financia con recursos públicos provenientes del Fondo nacional de Desarrollo Regional.”

En este punto, cabe dejar consignado lo razonado por la sentencia definitiva dictada en dicha causa, en los siguientes considerandos: **“DÉCIMO CUARTO.** *Que, sin perjuicio de no estar operativo el nuevo vertedero “Chaqueta Blanca” por las diversas razones aludidas por la municipalidad, la Resolución Exenta que dispuso el cierre de “La Chimba” data del año 2003 incumpliendo por mucho lo resuelto por la autoridad sanitaria, incumpliendo injustificadamente lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 189 y artículo 78 y siguientes del Código Sanitario. Por su parte, el Código Sanitario contempla desde el artículo 11 y siguientes, las atribuciones y obligaciones sanitarias de las municipalidades quienes tienen la obligación de recolectar, transportar y eliminar por métodos adecuados, residuos y desperdicios que se depositen o produzcan en la vía urbana.*

DÉCIMO QUINTO. *Que, por otra parte no se han agregado antecedentes necesarios para que, dentro de la órbita de competencia de este tribunal pudieren probarse esas exigencias y poder acoger esta demanda, tanto más, cuanto que, sería público y notorio, lo que no es necesario probar que el vertedero de La Chimba fue cerrado para su uso y abierto el nuevo vertedero denominado Chaqueta Blanca, donde actualmente se estarían depositando los residuos y/o basuras recogidos en la ciudad.”*

Finalmente, cabe añadir que la ltma. Corte de Apelaciones de esta ciudad, conociendo del recurso de apelación interpuesto en contra de la citada sentencia, señala en lo pertinente, lo siguiente: *“En resumen, lo que se reprocha a la demandada es que ordenara a la Municipalidad el cierre de un vertedero y la apertura de otro, no obstante que el nuevo aún no contaba con recepción definitiva de las obras por parte de la Dirección de Obras Municipales y, en la práctica, como consecuencia de la falta de esta, de patente municipal.*

Debe indicarse que, como se observa de la Resolución Nro. 6.266, de 20 de diciembre de 2018, no se impone a la demandante la apertura del nuevo centro de acopio, sino que debería velar por emplearlo, imponiéndose, en el resuelvo N°1, que no fue impugnado, un plazo de 20 día hábiles para presentar un estado de avance y actualización del Plan Operativo, con las exigencias que allí se indican.

Solo en la Resolución Nro. 300 de 18 de enero del año 2019, se dispone imperativamente el uso del nuevo centro, ante la constatación de



graves deficiencias de funcionamiento del antiguo, incluyendo presencia de vectores, cobertura insuficiente de los residuos, existencias de quemas en diversos sectores y condiciones riesgosos de accidentabilidad.

Si a ello se aúna lo determinado en la sentencia de primera instancia, en orden a que desde el año 2003 la autoridad sanitaria estaba requiriendo el cierre del vertedero La Chimba y el incumplimiento de una serie de resoluciones posteriores que instaban por el acatamiento del plan operativo para la solución del grave problema sanitario que originó el acopio de residuos domiciliarios, y que no fueron objeto de impugnación, debe convenirse que la actuación del Servicio de Salud se ajustó a sus facultades y resultaban proporcionales a la grave situación sanitaria, frente al incumplimiento de la Municipalidad de contar con un centro de acopio de residuos domiciliarios en condiciones básicas de funcionamiento.

Se trata así de resoluciones dictadas ante la constatación del incumplimiento reiterado de la Municipalidad, en una materia vital para la salud pública, por lo que era exigible que actuara con estricto apego a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, probidad y coordinación, que rigen la actividad de la administración pública conforme a lo previsto en el artículo 3 inciso segundo de la Ley Nro. 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En caso alguno puede decirse que las resoluciones sean ilegales pues, a lo sumo, lo único que se le reprocha, y como se vio, técnicamente a solo una de ellas, es una suerte de imposibilidad temporal de cumplimiento por no estar recepcionada definitivamente las obras, cuestión que, por cierto, depende de una autoridad municipal, el Director de Obras Municipales, debiendo considerarse que, como se dejó constancia en los informes elaborados por Contraloría General de la República, hubo un incumplimiento grave y reiterado por parte de la propia Municipalidad de sus labores de control y fiscalización en lo más variados aspectos de la ejecución de las obras y, consiguientemente, el retardo en la ejecución del proyecto del nuevo centro de acopio (479 días de atraso según el decreto de recepción de obras acompañado por la propia Municipalidad en esta sede) le es directamente atribuible.

En todo caso, la Municipalidad se asila en la falta de recepción definitiva de la obras, aduciendo que no estaban en un 100% terminadas, pero de conformidad a lo dispuesto en los artículos 144 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la recepciones también pueden ser parciales, cuestión que no aparece ni siquiera explorada por la demandante,



no obstante la gravedad de la situación sanitaria creada por su negligencia, y a la que la demandada hizo mención al pronunciarse sobre la solicitud de reposición de las resoluciones impugnadas en estos autos...”

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en este orden de ideas, cabe adicionar la opinión técnica emitida por el perito Durán Aros, Constructor Civil, en su informe allegado en folio 120, que en relación a lo controvertido en cuanto a esta primera falta de servicio, señala que: “Esta etapa de construcción fue muy complicada debido a los constantes cambios que se iban sucediendo, a raíz de los requerimientos sectoriales intervinientes en proyecto. Muchos de estos cambios, pasaron a ser muy significativos y relevantes, como la construcción de una piscina de 500 M3, para tratar el lixiviado generado en el relleno sanitario, esto a petición de la Seremi de Salud de Antofagasta. La recepción provisoria de las obras podría ser solicitada una vez que se diera por terminada la etapa de construcción.

Hay que destacar en este punto, que la obra terminada, es cuando se cumple el 100% del itemizado de presupuesto, es decir que estuvieran todas las partidas ejecutadas, independiente que estas pudieran tener algún detalle, o que a posterior pudieran ser rechazadas por alguna inspección. Para este caso en particular, el término de la etapa de construcción era cuando se terminaba la marcha blanca del proyecto. La solicitud de recepción provisoria, debía ser presentada a la DOM Antofagasta, por parte de Consorcio Santa Marta, quien, en 3 oportunidades durante el año 2017, presentó las solicitudes, con el fin que se formara una comisión para la recepción provisoria. El ITO asignado a esta obra, es quien informa de los avances del proyecto, al departamento de ejecución de obras de la DOM, por lo tanto, el Director de Obras Municipales, siempre estuvo informado de los avances de la obra y rechazaba constantemente las solicitudes de recepción provisoria presentados, por Santa Marta, por no tener todas las partidas terminadas.

Debido a todos los cambios y a la negativa de la DOM a una recepción definitiva, se realizó una reunión el 26 de enero de 2018, en donde quedo establecido que se debía incorporar en los planos y las especificaciones del proyecto, todas las modificaciones, especificaciones, rectificaciones de errores, e indicaciones que forzaron a la modificación del diseño original del proyecto, confeccionando para esto un diseño final y definitivo de lo que se había ejecutado, con el fin de que el proyecto contemplara todos los trabajos necesarios para obtener todas aprobaciones



sectoriales en un conjunto, como diseño definitivo. Esta entrega de documentación por parte de Consorcio Santa Marta, fue el 14 de mayo de 2018. Esta entrega podemos denominarla como las REV1 (revisión 1) del proyecto modificado, y en el cual debía contener todas las consideraciones señaladas y materializadas en la etapa de construcción.

Entregada la REV1, por parte de Consorcio Santa Marta a la DOM, estas debían ser aprobadas como un nuevo diseño y no como una modificación al que existía del año 2015. **Por lo tanto, los tiempos en esa etapa de estudios eran completamente por parte de la IMA, Consorcio Santa Marta debía esperar hasta tener indicaciones de nuevos cambios o modificaciones y/o sugerencia por parte de Secoplan.** Una vez aprobado el rediseño del proyecto, este podía ser revisado en terreno, para dar por aprobado en forma definitiva al proyecto.

Cabe destacar que los planos de la REV1, podrían servir también una vez revisados en terreno por parte de ITOs IMA, como planos As built, siempre y cuando lo instalado sea lo mismo que está indicado, en los planos de REV1.”

VIGÉSIMO NOVENO: Que, se encuentra refrendado lo anterior, por informe final N° 242/2018 elaborado por la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Antofagasta, en referencia al proyecto “Contrato por la Concesión Municipal del Centro de Tratamiento y Disposición Final Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, Comuna de Antofagasta, II Región Chile”, evacuado los primeros días de marzo de 2019, en el cual se plasman diversas anomalías respecto del sindicado proyecto, tanto en su etapa de administración como de construcción añadiendo además dicho informe: “14. Dilación de la unidad técnica en responder los requerimientos formulados por el contratista

De las indagaciones efectuadas por esta Entidad Fiscalizadora, se constató que la empresa Consorcio Santa Marta S.A. mediante carta fechada el 28 de febrero de 2017, presentó el informe de mayores obras al proyecto a la entidad edilicia, producto de las exigencias efectuadas a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, las cuales quedaron incorporadas en la precitada RCA, por un monto de \$ 4.059.498.645.

Luego, se corroboró que el 19 de julio de 2017, la empresa Concesionaria reingresó a la Secoplan los antecedentes que -a su parecer- justificaban técnicamente la ejecución de obras no contempladas en la oferta original, desglosadas en dos partes, la primera sobre exigencias sectoriales incorporadas por servicios públicos y la otra, en razón de los requerimientos



de obras hidráulicas adicionales en la cuenca del proyecto, por montos ascendentes a \$1.527.094.839 y \$3.149.847.783, respectivamente, totalizando \$ 4.676.942.622.

Sobre la materia, se verificó que el 16 de febrero de 2018, a través de un certificado sin número, la Secoplan realizó la devolución de la mencionada carpeta de obras adicionales a la empresa, para que esta la revisara y completara los antecedentes inconclusos, sin indicar mayor detalle, **lo que da cuenta del extenso tiempo transcurrido de respuesta a los requerimientos solicitados por la Concesionaria Santa Marta S.A., esto es, 213 días corridos,** situación que fue corroborada por dicha dependencia municipal por medio de correo electrónico de 12 de abril de 2018.

En relación con lo anterior, se observó que la inspección técnica, en su informe N° 10, de 2 de marzo de 2018, justificó un aumento de plazo de 180 días corridos a la empresa adjudicataria -cuya aprobación se encontraba en trámite al 25 de abril de 2018, data en que se practicó la verificación- **indicando que el tiempo esperado por el concesionario para obtener la respuesta de Secoplan implicó siete meses de retraso,** por lo tanto, la unidad técnica en la etapa de construcción, en atención a la razón expuesta, consideró atendible su argumento de incremento en la fecha de término contractual del proyecto.

Al respecto, tal como se ha manifestado en la reiterada jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s 15.139, de 2014 y 88.518, de 2016, **situaciones como la descrita implican una infracción al artículo 8° de la ley N° 18.575, que impone a los organismos públicos el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, y al artículo 7° y 8° de la ley N° 19.880, relativo al principio de celeridad y conclusivo, conforme al cual las autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en el procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditas las actuaciones pertinentes y debe dictar un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad, correspondiendo, asimismo, que las decisiones se adopten y comuniquen en tiempos razonables.**

En respuesta a lo anterior, el municipio indica que, en el primer informe de mayores obras, se le solicitó al Consorcio Santa Marta S.A.,



mediante los oficios N°s 349 y 1.027, de 8 de mayo y 12 de junio, ambas de 2017, respectivamente, detallar técnicamente la información ingresada.

En cuando a la segunda presentación, expone que, al 29 de mayo de 2018, la empresa no había precisado los antecedentes que implicarían las mayores obras, debido a que aún no se había definido claramente las obras por los organismos respectivos, entre ellos, el empalme Ruta 26 y los canales de escorrentías.

Es dable consignar que los argumentos expresados por el servicio, no resultan suficientes para justificar la excesiva dilación en la toma de decisiones sobre el segundo ingreso del informe de mayores obras, tratándose, además de hechos consolidados no susceptibles de corregir, por lo cual se estima pertinente mantener la presente observación.”

A lo anterior debe agregarse que en las conclusiones de este informe, se indica, que “ *En cuanto a lo indicado en el numeral 14, del capítulo 11, acerca de la dilación de la unidad técnica en responder a los requerimientos formulados por el contratista (C), la Municipalidad de Antofagasta deberá, en adelante, adoptar las medidas necesarias para responder formalmente presentaciones que reciba, gestionándolos de manera oportuna, dando estricto cumplimiento a lo señalado en el artículo 8° de la mencionada ley 18.575 y los artículos 7° y 8° de la nombrada ley 19.880*”

En otro apartado de este informe, al finalizar el punto 17, se indica lo siguiente: “*Finalmente, cabe hacer presente que en el transcurso de la auditoría, se advirtió la falta de control y supervisión por parte de la inspección técnica de la obra respecto del efectivo cumplimiento del contrato, conforme a las bases técnicas y demás pliegos de condiciones y normativa que regula la ejecución de este, aspectos que deberán ser corregidos en el futuro.*”

TRIGÉSIMO: Que, tal como se ha venido anticipando y conforme a los antecedentes descritos en lo que antecede, el quid del asunto radica en la supuesta falta de servicio en que habrían incurrido algunos entes dependiente de la Municipalidad demandada, en su calidad de órganos de la administración del estado, debido a la tardanza injustificada en aprobar el diseño definitivo del proyecto de mallas, o, en su defecto permitir que se hiciera entrega de los planos as-built, como parte del procedimiento de recepción de la obra, todo lo cual los apartaría de una eventual calificación como contratantes, en relación al pacto de base.



Sobre este particular, no debe olvidarse que en los casos en que un órgano de la administración del Estado celebra contratos con particulares, sus relaciones jurídicas dejan de reglamentarse completamente por las normas que acerca de la contratación contempla el Código Civil, pues en ello se involucra además normativa propia del derecho administrativo que, en los hechos, posicionan a la administración en una especie de estatus de sujeto poderoso y activo, con un conjunto de potestades que repercute en la esfera jurídica particular, más aún cuando el órgano estatal, frente al contrato celebrado con el particular, ejerce por una parte un rol de control en el cumplimiento de lo estipulado en su calidad de contratante y, por otra, a través de sus órganos, fiscaliza y autoriza ciertos trámites indispensables para el cumplimiento de lo acordado, situándose en esta última parte como un órgano técnico destinado a satisfacer necesidades públicas, de manera regular y continua, todo lo cual permite distinguir las responsabilidades que dicho órgano tiene como parte contratante y, por otro lado, en su carácter de órgano técnico perteneciente a la maquinaria estatal.

A este respecto, cabe señalar que tal como lo sostuvo el perito en su informe, asimismo de las observaciones emitidas por la Contraloría Regional y de lo concluido por la ltma. Corte de Apelaciones en el fallo precitado, la municipalidad demandada, no en su calidad de mandante del Gobierno Regional como Unidad Técnica de proyecto ni como parte contratante del mencionado acuerdo de voluntades, sino que por medio de órganos que integran su estructura funcional y administrativa habría actuado en forma deficiente al no otorgar un servicio conforme a lo esperado en su carácter de órgano del Estado, pues, a través de ellos habría retardado innecesariamente la aprobación del diseño definitivo del proyecto, o en su defecto, permitir la entrega de los planos as-built como parte del procedimiento de recepción de la obra.

En esta parte, debe recordarse que según figura en las bases técnicas era indispensable para que se procediera a la recepción provisoria del Centro de Tratamiento y disposición final contar con los planos definitivos aprobados, debiendo anticiparse, como se dirá más abajo, que ello no ocurrió oportunamente en la especie, a tal punto que la ltma. Corte de Apelaciones en la sentencia mencionada, consideró negligente el actuar municipal, al desestimar lo aseverado por la Municipalidad en cuanto a que no había recepcionado definitivamente las obras, aduciendo que no estaban en un 100% terminadas, fundamentando lo anterior en la circunstancia que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 145 de la Ley General



de Urbanismo y Construcción, las recepciones también podría ser parciales, lo que ni siquiera fue sondeado por la municipalidad demandada, no obstante a la notoriedad de lo grave de la situación sanitaria por la que atravesaba la ciudad debido al cierre del vertedero ilegal ubicado en el sector La Chimba por disposición de la SEREMI de Salud, lo que a todas luces importa una infracción al artículo 8 de la Ley 18.575 que impone a los organismos públicos el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, como lo estatuido por los artículos 7° y 8° de la Ley 19.880 relativos a los principios de celeridad y conclusivo, los que imponen a la autoridad y a sus funcionarios el deber de actuar por propia iniciativa en el procedimiento respectivo y en su prosecución, haciendo expeditas las actuaciones pertinentes y dictar un acto decisivo que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, en el que se contenga su voluntad como también que sus decisiones se adopten y comuniquen en un tiempo razonable.

En este orden de ideas, cabe reiterar que la demandante presentó tres solicitudes de recepciones provisorias de fechas 16 de junio de 2017, 25 de agosto del mismo año y de 24 de enero de 2018, las que fueron rechazadas por al DOM mediante los ordinarios N°368 de 17 de junio de 2017, N°540 de 30 de agosto de 2017 y N° 072 de 26 de enero de 2018, principalmente por existir algunas partidas del proyecto inconclusas, decisiones administrativas en las que no se sometió a análisis, pese a permitir una recepción parcial de las obras los artículos 144 y 145 de la Ley especial citada más arriba, lo anterior, no obstante a que en la segunda de dichas solicitudes (25 de agosto de 2017), la actora requirió expresamente la recepción parcial de la obra y, en la última (24 de enero de 2018), hizo presente a la autoridad edilicia respectiva, que desde el punto de vista ambiental y sanitario no existía ningún impedimento normativo ni técnico que imposibilitara la operación de “Chaqueta Blanca” a partir del 5 de febrero de 2018, ni obstáculo alguno para que las gestiones administrativas y de corrección de obras menores se pudieran efectuar en paralelo durante el periodo de operación provisoria del proyecto, lo que trajo como consecuencia que de manera injustificada no se aprobase el diseño definitivo, lo que llevaba implícito la recepción de los planos as-built, es decir, éstos no fueron aprobados oportunamente por el organismo técnico responsable, a tal punto que ello acaeció incluso con posterioridad a la fecha en que la SEREMI de Salud, conforme se desprende del expediente tenido a la vista, Rol C-2368-2019 del Segundo Juzgado de Letras de esta



ciudad, dictó dos actos administrativos, a saber, la Resolución Exenta N° 6266 de 20 de diciembre de 2018, que impuso a la Municipalidad velar porque los residuos domésticos y asimilables fueran dispuestos en el Centro de tratamiento denominado Chaqueta Blanca y la Resolución Exenta N° 300 que insistió en la obligación municipal de cumplir la resolución N° 6266, como asimismo, determinó la imposibilidad de disponer residuos domiciliarios en el sitio denominado “La Chimba”, apercibiéndola de cumplir la resolución o de lo contrario iniciar sumarios sanitarios.

A lo anterior, debe adicionarse que tal como aparece de la documental acompañada como medida para mejor resolver, folio 101, la Recepción Definitiva de las Obras se certificó recién con fecha 16 de noviembre de 2020, argumento adicional que nuevamente pone de manifiesto la aprobación tardía de dichos planos y en contravención a principios que informan la actividad administrativa, pese a que, tal como sostuvo la ltima. Corte de Apelaciones, el Centro de Tratamiento, desde el punto de vista sanitario se encontraba en condiciones óptimas de funcionar con mucha antelación a ello, todo lo cual fue refrendado por la declaración de los testigos de la demandante los que examinados legalmente, y dando razón de sus dichos, al cuarto punto de prueba – *“Efectividad que la Municipalidad de Antofagasta se negó injustificadamente a aprobar el diseño y los planos as built. Hechos y antecedentes.”*- declararon: primeramente, don Jorge Osvaldo Guzmán Briones, lo siguiente: *“Puedo decir que yo participé en la modificación del permisos originalmente otorgado y que en el trámite de aprobación de la modificación la Municipalidad o la Dirección de Obras opuso objeciones que no están reglamentariamente contempladas como motivo de objeciones, eso hizo que el permiso de modificación se atrasara por lo que yo puedo decir, no es que se haya negado, pero sí que hubo objeciones que pudieron haberse evitado y agilizado el trámite del permiso dado que el propietario es la propia Municipalidad, y la Dirección de Obras Municipales es uno de sus departamentos.*

Una objeción fue derivar hacia un organismo externo, como es el(?) CORE una autorización para aprobar la modificación que era necesario tramitar, no siendo esta exigencia una condición que esté establecida ni en la Ley ni en la Ordenanza la que sólo exige la concurrencia del propietario para las presentaciones relacionadas con los permisos y sus modificaciones.”



Luego, don Patricio Andrés Ossandon García indica que: *“A mi parecer así fue ya que todo fue ejecutado en base a la normas de construcción según la Ley de Urbanismo y Construcción.*

Y, finalmente, don Pedro Eduardo Rivas Valdivia señala que: *“Efectivamente según lo indicado en el punto dos de esta declaración, la ~ Municipalidad de Antofagasta se negó de manera persistente a otorgar las facilidades para iniciar la operación de este proyecto, aun cuando como se indicó anteriormente, los permisos requeridos por las autoridades sanitarias y ambientales se encontraban otorgados desde el mes de Junio del 2017.*

Para mayor detalle, en Junio del 2017 y una vez que el contratista a cargo de las obras civiles entregó los planos "as built" de las instalaciones, estos fueron adjuntados al expediente que se entregó a la Municipalidad de Antofagasta, expediente que se devolvió por parte de la Municipalidad invocando una serie de observaciones de carácter menor y no referidas específicamente a la falta de construcción de alguna partida.

Esto planos que no tuvieron modificación posterior junto con los planos de las demás obras del relleno sanitario correspondieron a la documentación acordada en enero del 2018 con la Municipalidad, instancia que fue rechazada en Septiembre del 2018 por dicha autoridad según lo mencionado en el punto segundo. “

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, de los antecedentes probatorios reseñados surgen una serie de presunciones judiciales que por cumplir con los requisitos del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, en relación al 1712 del Código Civil, permiten concluir que efectivamente en la etapa de construcción del Proyecto del Centro de Tratamiento y Disposición final e Residuos sólidos domiciliarios y asimilables, comuna de Antofagasta, II Región Chile, órganos de la administración del Estado dependientes de la IMA, no en su carácter de parte contratante en el pacto de marras sino como servicios o entes públicos que intervienen en proyectos en los que se encuentran involucrados fondos públicos y actuando como órganos técnicos en el cumplimiento de funciones que le entrega la Ley, de manera injustificada, realizaron actos en el ejercicio de dichas funciones que significaron retardar la aprobación definitiva del proyecto modificado contenido en los planos as-built, ya que pese a los intentos de la actora de que se recepcionara provisionalmente la obra - lo que llevaba implícito la aprobación de dichos planos -, ello no se produjo y, tal como señala el perito, ésto se debió a razones *“...más administrativas que físicas de la construcción”*, más aún si se tiene especialmente presente que la Ilتما.



Corte de Apelaciones en la causa Rol Ingreso Corte 1014-2019, calificó como un actuar negligente el accionar de la entidad edilicia demandada, toda vez que, conforme lo mandatado por los artículos 144 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, como ya se dijo, podría haber incluso procedido a efectuar recepciones parciales.

En este orden de ideas, de lo resuelto por el tribunal de alzada, se puede concluir que el único impedimento temporal que obstaculizaba la finalización de la etapa de construcción, para dar paso a la etapa de marcha blanca y que permitiría que el proyecto entrara en su fase de operación, era la falta de la recepción definitiva de las obras, cuestión que dependía de una autoridad municipal, a saber, el Director de Obras Municipales, quien evidentemente no es parte del contrato y, su actuar en ningún caso puede calificarse como un incumplimiento contractual, por lo que su proceder negligente, tal como lo señala la ltma. Corte de Apelaciones en el fallo ya detallado, necesariamente debe ser enmarcado como un deficiente servicio prestado por un órgano de la administración municipal y ser considerada, en definitiva, una falta de servicio, toda vez que pese a encontrarse el proyecto en referencia en una etapa en que se hacía indispensable se aprobaran los planos originales con las modificaciones introducidas al mismo por los organismos sectoriales y recepcionar provisoriamente las obras, no lo hizo, emitiendo continuos oficios de rechazo a las solicitudes que en este sentido presentó la actora, basadas en la existencia de partidas no ejecutadas y/o incompletas, sin considerar la grave situación sanitaria por la que atravesaba la ciudad, más aun si éste contaba con los permisos sectoriales ambientales y de salud que permitían su funcionamiento, al punto que la SEREMI del ramo, como ya se aseveró, así lo dispuso, lo que conforme lo sostenido por ltma. Corte de Apelaciones de esta ciudad en el reseñado fallo, era una materia vital para la salud pública, por lo que se hacía exigible, en este caso que se actuara con estricto apego a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, probidad y coordinación que rigen la administración pública conforme a lo prevenido en el artículo 3 inciso 2° de la Ley 18.575, lo que se ve agravado si se considera que dicha autoridad se encontraba facultada por ley para efectuar una recepción parcial de las obras, lo que no acaeció en la especie, razones todas las cuales, **se acogerá** la demanda en lo que guarda relación con esta primera falta de servicio.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en lo que respecta a la **segunda falta de servicio alegada por la actora**, consistente en la negativa en



formar la comisión de recepción y consecuentemente autorizar la recepción provisoria de la obra.

En este punto, para enmarcar la referida alegación se hace indispensable reiterar lo que a este respecto se establece en las **Bases Técnicas**, la que en su apartado 10, intitulado: “Recepción de los Trabajos de Construcción”, y particularmente en el numeral 10.1: “Recepción Provisoria Centro de Tratamiento y Disposición Final”, señala:

“Una vez finalizada la Etapa de Construcción del ‘Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos de Sólidos Domiciliarios y Asimilables’ de la comuna de Antofagasta, la empresa a cargo del Contrato de Concesión deberá entregar la solicitud de recepción provisoria de obra a la Inspección Técnica Municipal, la que deberá acompañar con los siguientes documentos:

- a) Carta Solicitud de Recepción.*
- b) Planos Definitivos de Construcción.*
- c) Certificado de Recepción SEC, Proyecto Eléctrico.*
- d) Certificado de Recepción AA y/o SS, Proyecto Sanitario.*
- e) Libro de Obras.*
- f) Certificados de Calidad Respectivos (Se indican en Bases Técnicas).*

*Dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles a contar de la fecha de solicitud de recepción provisoria, **el mandante procederá a nombrar una comisión de recepción**, compuesta por profesionales idóneos para el efecto, y llevar a cabo la recepción provisoria del proyecto, proceso que no podrá exceder de los 10 días a partir del nombramiento de la Comisión de Recepción.*

Terminada la recepción provisoria, se levantará un acta donde se dejará constancia de todas las observaciones detectadas por la Comisión de Recepción, sean ésta fallas de Construcción y/o Diseño, y la empresa tendrá un plazo determinado por la Comisión.

Una vez realizada la recepción provisoria la Comisión determinará si es posible con las observaciones establecidas dar inicio a la etapa de Marcha Blanca, en caso de ser posible, las observaciones deberán ser resueltas dentro del plazo establecido de Marcha Blanca.

En caso contrario la Comisión determinará el tiempo establecido para resolver las observaciones y dar inicio a la etapa de Marcha Blanca”.



A este respecto, cabe precisar que en las reseñadas bases, en su punto **20.1.2** se indica que la Unidad Técnica en la etapa de construcción estaba por conformaba por:

- La Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAN).
- La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.
- Departamento de Ejecución de Obras Municipales, dependientes de la

Dirección de Obras Municipales.

Asimismo, en el numeral **20.2** se señala entre las obligaciones de las Unidades Técnicas - para esta etapa -, la de *“tramitar la recepción provisoria y definitiva de las obras.”*

En ese escenario, tal como se indicó en motivos previos y como se desprende de la prueba rendida, la actora con fecha 16 de junio de 2017, ingresó la primera solicitud de Recepción provisoria de las obras, adjuntando los antecedentes que se le exigían según las bases técnicas en su punto 10, siendo rechazada por la DOM por el incumplimiento en relación a la partida de empalme del camino a Ruta 26, al estimar que la obra no se encontraba terminada totalmente en sus partidas, según presupuesto, por lo tanto la etapa de construcción no estaba finalizada.

Luego, con fecha 5 de agosto de 2017, se ingresa la segunda solicitud Recepción Provisoria por la demandante allegándose los mismos documentos, agregando como nuevo antecedente *“informe jurídico que entrega antecedentes fundados respecto de la posibilidad efectuar una recepción parcial de las obras.”*, sin embargo la DOM nuevamente rechaza esta petición, primero, porque entre los documentos adjuntos no se encontraba el informe jurídico mencionado y, segundo, por no estar terminada la partida de empalme con la Ruta 26, sin aprobación de las modificaciones por el GORE respecto a las partidas modificadas, la planta de lixiviados según DS N° 189 y observaciones de la ITO por Libro de Obra, respectivamente.

Finalmente, la actora ingresó una tercera solicitud de Recepción Provisoria el 24 de enero del año 2018, tal como se explicita en ese documento, adjuntando todos los antecedentes exigidos en las Bases Técnicas, mismos cuya ausencia había sido representada por la DOM en el oficio anterior y, subsanando las observaciones realizadas previamente por dicho organismo. Además, le comunicó que desde el punto de vista ambiental y sanitario, no existía impedimento normativo o técnico para iniciar la operación del Centro de Tratamiento bajo la modalidad de Operación



Provisoria, lo que también es rechazado por DOM, mediante Oficio Ord. N°072 de 26 de enero de 2018 en el que, en términos generales, se representó a la empresa demandante, que no se encontraban terminadas partidas según bases y presupuesto, algunos documentos y autorizaciones que aún faltaban que allí se explicitan.

A este respecto, cabe añadir que los cuatro testigos de la demandante, estuvieron contestes al punto cinco de la interlocutoria de prueba – *“Efectividad de concurrir en la especie los presupuestos fácticos para la conformación de la comisión de recepción. Antecedentes, hechos y demás circunstancias.”* - en cuanto indicaron que en el caso sublite Consorcio Santa Marta S.A. cumplía con todas las exigencia o requisitos fácticos para que se recepcionar provisionalmente las obras y, como consecuencia de ello se conformara la comisión de recepción, debiendo destacarse en esta parte lo aseverado por el último deponente, el que indicó: *“Según los antecedentes del proceso de licitación pública adjudicado a Santa Marta, le correspondía a esta última empresa solicitar la comisión de recepción y por parte de la Municipalidad la obligación de conformar esta comisión en un plazo de 10 días hábiles. Según este procedimiento no era una opción optativa, sino que, era una condición imperativa para lo cual se tuvo que presentar una serie de antecedentes requeridos para que dicha solicitud estuviera conforme según el procedimiento instaurado por la propia Municipalidad. Dicha instancia, fue negada al menos 3 veces por parte de la Municipalidad, invocando como respuesta ante cada solicitud observaciones menores no relacionadas con la construcción específica de obras. De hecho, entre Junio del 2017 y diciembre del 2019 no se construyó ninguna obra que hubiese requerido de aprobación municipal y que producto de ello hubiese sido posible variar las condiciones que existían en Junio del año 2017 para iniciar la operación.”*

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, en conclusión, ponderada de acuerdo a las reglas legales, se puede sostener que, conforme al marco normativo y contractual que regía la relación de las partes de este juicio, una vez presentada la solicitud de Recepción provisoria de la Obras a la Inspección Técnica Municipal (ITO) del Departamento de Ejecución de Obras Municipales dependiente de la DOM - órgano técnico que según se expresa en la contestación de la demanda *“...cumple una doble función; por un lado, cumple la función de inspección técnica de la obra a través del departamento de ejecución de obras municipales, y por otra, el Director de Obras Municipales cumple las funciones encomendadas por la Ley General*



de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, dentro de las cuales se encuentra el otorgamiento de permiso de construcción y la recepción definitiva de obras.” – dicho órgano debía remitirla a la mandante, en este caso a la alcaldesa de la comuna, para que esta autoridad edilicia, en su calidad de parte de este contrato, dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la citada solicitud, procediera a nombrar una comisión de recepción, la que estaría compuesta por profesionales idóneos, quienes tenían como cometido la recepción provisoria del proyecto, dentro del término que se indica en el apartado 10 de las bases técnicas, no obstante lo cual, lo cierto es que presentadas dichas solicitudes, fueron rechazadas en tres oportunidades por el Director de la DOM aduciendo el incumplimiento de diversas partidas según proyecto y presupuesto, para lo cual no se encontraba facultado conforme a los términos de referencia, pues ello correspondía hacerlo a la comisión sindicada, lo que se concluye de la lectura del apartado antes detallado, en el que se consigna que ésta (comisión de recepción), una vez terminada la recepción provisoria debía levantar un acta dejando constancia de las observaciones por ella detectadas, por fallas de construcción o diseño, para lo cual debía otorgar un plazo a la concesionaria para subsanarlas, todo lo cual no ocurrió en la especie, pues esta labor se la arrogó la Dirección de Obras Municipales, a través de su director.

En este punto, se debe precisar, que si bien esta falta de servicio se le imputa a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, en el punto 3 del libelo pretensor se precisa que ésta habría sido cometida por dicho ente edilicio debido al actuar negligente “ *de los distintos departamentos que forman parte de ella*”, lo que fue reiterado y precisado en la réplica, al señalar: “*Debemos tener presente que si bien la MUNICIPALIDAD es mandante de Consorcio Santa Marta S.A. en el contrato que las liga, es la misma MUNICIPALIDAD quien además se relaciona como ente público en otros ámbitos con mi representada, más allá de su calidad de mandante, por ejemplo, es quien debe otorgar la patente comercial provisoria, recibir la obra y aprobar el diseño definitivo de la obra de modo que se ajuste al permiso de edificación aprobado, y es justamente en ese ámbito en que se ha producido la falta de servicio, siendo del todo procedente la demanda interpuesta.*”, por lo que debe entenderse que la culpa en el servicio reclamada en la demanda, lo es, en esta parte, en relación con lo obrado por el Director de la Dirección Obras Municipales, al haber excedido éste la órbita de sus competencias y, que ello, al haber provocado un retardo



injustificado en la Recepción Provisoria de la obra y la consecuente falta de conformación de la sindicada Comisión, se enmarca más en el concepto de ilícito civil que en el de incumplimiento contractual, tal como ya fue concluido más arriba, pues, aquel funcionario, tal como se indica por la actora, incurrió en dicha conducta en su carácter de órgano público del Estado con el que se vinculaba la demandante en su calidad de concesionaria de un proyecto que involucraba fondos públicos, lo que indefectiblemente conlleva a considerar, que se cometió la falta de servicio pretendida en este punto, reforzando ello lo concluido por la Il. Corte de Apelaciones en la sentencia tantas veces mencionada, al estimar negligente su actuar, pues, perfectamente conforme lo estatuyen los artículos 144 y 145 de la Ley citada, siquiera sondeó dicha posibilidad, no obstante la complicada situación sanitaria y ambiental por la que atravesaba esta comuna, mismas razones que fueron consideradas para configurar la primera falta de servicio, todo lo cual debe darse por reproducido, lo que se hace aplicable en este punto por encontrarse ambas faltas de servicio estrechamente vinculadas, debiendo por tanto igualmente **accederse** a la demanda en este ítem.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, en cuanto a **la tercera falta de servicio alegada**, la que guarda relación con la negativa de otorgar la patente comercial provisoria, se debe dejar asentado que ello se fundamenta en que una vez concluida la Etapa de Construcción, la demandante solicitó el otorgamiento de la patente provisoria ante la IMA, la que requería como primera etapa y de manera interna a través de la Dirección de Obras Municipales de la emisión del correspondiente “Informe de Zonificación de Patentes”, lo que le fue desfavorable en tres oportunidades, a lo que se suma que a la fecha de interposición de la demanda el ente edilicio no habría emitido formalmente pronunciamiento que rechazare la sindicada solicitud.

En este punto, se hace indispensable, en primer término, detallar el marco normativo que reglamenta el otorgamiento de patentes comerciales provisionales y, acto seguido, determinar o delimitar las etapas que deben cumplir los contribuyentes para su obtención ante el Departamento de Rentas Municipales, dependiente de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta.

A este respecto, el **DL 3063 modificado por la Ley 20.494** que en su título cuarto intitulado “De los impuestos municipales”, reglamenta las distintas cargas impositivas que deben cumplir los contribuyentes en relación a aquellos que según ley corresponde su recepción por un ente municipal, particularizando en su artículo 26 inciso segundo primera parte, lo siguiente:



“La municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o la municipalidad hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario, como de emplazamiento según las normas de zonificación del Plan Regulador, de otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso, y siempre que no sea necesario verificar condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de Obras de la municipalidad.”

A su turno, el inciso quinto, precisa: *“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo, la municipalidad deberá otorgar patente provisoria en forma inmediata al contribuyente cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador; b) Se acompañe autorización sanitaria, en aquellos casos en que ésta sea exigida en forma expresa por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 1989; c) En el caso de actividades que requieran autorización sanitaria de aquellas que no se encuentren señaladas en el citado decreto con fuerza de ley, el contribuyente sólo deberá acreditar haber solicitado la autorización correspondiente a la Autoridad Sanitaria, y d) Los permisos que exijan otras leyes especiales, según sea el caso.”*

De otra parte, el inciso sexto, estatuye: *“La municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva en forma inmediata, una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o la municipalidad hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario, como de emplazamiento según las normas de zonificación del Plan Regulador, de otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso, y siempre que no sea necesario verificar condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de Obras de la municipalidad. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de patentes de profesionales y patentes de sociedades de profesionales, no se exigirá permiso alguno.”*

En este mismo sentido mediante **Ordenanza N° 2 de 2013**, de fecha 12 julio de aquel año, la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, reglamentó el otorgamiento de patentes provisorias para esta comuna la que indica en lo pertinente, lo siguiente:

“Artículo 1°: La Municipalidad de Antofagasta deberá otorgar patentes provisorias en forma inmediata al contribuyente cuando se cumplan los siguientes requisitos, según corresponda en cada caso:



a) *Emplazamiento según las normas sobre zonificación del plan regulador.*

b) *Se acompañe autorización sanitaria, en aquellos casos en que esta sea exigida en forma expresa por el Decreto con fuerza de Ley N°1 del Ministerio de Salud, de 1989.*

c) *En el caso de actividades que requieran autorización sanitaria de aquellas que no se encuentren señaladas en el citado Decreto con fuerza de Ley, el contribuyente sólo deberá acreditar haber solicitado la autorización correspondiente a la autoridad sanitaria.*

d) *Los permisos que exijan otras leyes especiales, según sea el caso.*

Añadiendo en su artículo segundo: “Se otorgará patente provisoria, de manera excepcional, no obstante no contar con los permisos que exigen otras leyes entendiéndose como tal el artículo 145° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, conforme a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 26° del DL N° 3.063, modificado por la Ley N° 20.494, por un año. Vencido este plazo, sin haberse cumplido con los requisitos para la obtención de la definitiva, la patente provisoria caducara de pleno derecho, debiendo el contribuyente cesar de inmediato sus actividades.”

De lo anterior, en especial de lo transcrito precedentemente - artículo segundo de la Ordenanza precitada -, debe reseñarse lo dispuesto en el artículo 145 de la **Ley General de Urbanismo y Construcciones**, a saber: *“Ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total. Los inmuebles construidos o que se construyan, según los permisos municipales, para viviendas no podrán ser destinados a otros fines, a menos que la municipalidad respectiva autorice el cambio de destino y el propietario obtenga la aprobación de los planos y pague el valor de los permisos correspondientes, cuando procediere. No se considerará alteración del destino de un inmueble la instalación en él de pequeños comercios o industrias artesanales, o el ejercicio de una actividad profesional, si su principal destinación subsiste como habitacional. Sin perjuicio de las multas que se contemplan en el artículo 20°, la infracción a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo podrá sancionarse, además, con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, que decretará el Alcalde, a petición del Director de obras Municipales.”*

A lo anterior, cabe adicionar que habiéndose accedido al portal web de la IMA - de acceso público - se detallan los pasos que todo contribuyente debe seguir a la hora de solicitar una patente comercial, a saber:



“Descripción del Trámite:

Con el certificado de avalúo y el inicio de actividades, se realiza la solicitud de zonificación de patente a la Dirección de Obras Municipales, la cual indicara si la actividad está o no permitida en el domicilio solicitado y si la patente se podrá otorgar en forma Definitiva o Provisoria, dicha respuesta es emitida dentro de 10 días hábiles. una vez recepcionado el informe de la D.O.M. el contribuyente debe presentar el resto de la documentación para la obtención de la patente.”

Conforme a la normativa transcrita, se puede concluir que la IMA, para los efectos de otorgar una patente provisoria, cuando el contribuyente cumpla con los requisitos que estatuye el inciso quinto del artículo 26 del DL 3063 modificado por la Ley 20494 - mismos cuyo cumplimiento exige el artículo primero de la Ordenanza precitada - y tal como se desprendería del inciso sexto del artículo referido, una vez que el contribuyente hubiera acompañado los antecedentes reseñados, se encuentra obligada a entregar la patente respectiva en forma inmediata y, en su caso, cuando el ente edilicio hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario como de emplazamiento, según las normas de zonificación del plan regulador como de otros permisos que leyes especiales le exigiera, según el caso y, siempre que no sea necesario que la DOM verifique condiciones de funcionamiento, sin perjuicio de las exigencias que impone el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcción en cuanto a que para que una obra pueda ser habitada o destinada a uso requiere de la Recepción definitiva parcial o total, se aclara por el artículo segundo de la ordenanza del año 2013, que en esos casos la IMA igualmente deberá otorgar de manera excepcional la patente provisoria, por el lapso de un año, añadiendo que, en caso de no cumplirse con el requisito de contar con los permisos que exige el artículo 145 citado, la patente referida caduca de pleno derecho y, consecuente con ello, establece el deber del contribuyente de cesar inmediatamente sus actividades, es decir, que la falta de recepción definitiva total o parcial de una obra o proyecto, en nada impide a su ejecutor, visto como contribuyente, que se le otorgue provisoriamente dicha patente comercial, bajo la condición suspensiva de que si no cumple con aquel requisito dentro del término indicado, contado desde su otorgamiento, la misma caduca de pleno derecho, quedando impedido de continuar con sus actividades comerciales.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, conforme a lo señalado en la demanda y de la documental allegada por la demandante en folio 51, se desprende



que dicha parte habría realizado tres solicitudes de informe de zonificación, conforme las exigencias requeridas por el ente edilicio, los que según los informes de zonificación números 2463/2018, 3875/2018 y 68/2019 fueron rechazados, fundamentalmente por la circunstancia que Consorcio Santa Marta S.A. no contaba con Recepción definitiva de las obras, motivo por el cual no cumplía con los requisitos contemplados en el artículo primero de la Ordenanza N°2/2013.

A lo anterior, cabe agregar lo que sobre esta cuestión controvertida declararon los testigos de la demandante, al punto sexto de la interlocutoria –*“Efectividad de concurrir en la especie los presupuestos fácticos para el otorgamiento de la patente provisoria a la demandante Consorcio Santa Marta S.A. para el funcionamiento del relleno sanitario Chaqueta Blanca. Antecedentes, hechos y demás antecedentes.-*, quienes legalmente examinados, dando razón de sus dichos, estuvieron contestes en declarar que Consorcio Santa Marta S.A. cumplía con todos los requisitos y/o condiciones para obtener patente comercial provisoria, precisando el tercer y el cuarto testigo, respectivamente, lo siguiente: *“Me remito en lo declarado en el punto quinto y además debo decir que la patente provisoria en ninguna circunstancia otorga la recepción definitiva de las obras sino que lo que indica es que el proyecto cumple con los requisitos mínimos para entrar en operaciones por lo que los certificados de autorización mencionados anteriormente dan cumplimiento a estos requisitos mínimos.”*

“Me consta que en Diciembre del año 2018 no había ningún impedimento para el otorgamiento de una patente provisoria por parte del Municipalidad de Antofagasta. Ello debido a que en una reunión técnica sostenida en dependencias municipales con presencia de la Dirección de Obras Municipales, la Unidad de Secoplan, el administrador municipal, más la Dirección Jurídica y las Alcaldesa como máxima autoridad municipal, se llamó a dicha reunión a la Directora de Rentas Subrogante y se llamó telefónicamente al mismo tiempo al Director de Rentas Titular, siendo señalado por ambos funcionarios de manera separa y casi en forma simultánea, que el único antecedente requerido para el otorgamiento de patente provisoria correspondía al llenado de un formulario y que para todos los contribuyentes se otorgaba el plazo de un año para el otorgamiento de la patente definitiva. Aun cuando el Director de Obras estuvo presente y no pudo desmentir esta afirmación, se negó al otorgamiento del certificado de zonificación, certificado que se envía internamente desde la Dirección de Obras al departamento de Rentas. Las razones de estos tres rechazos no se



encuentran contenidas ni en el formulario entregado por la Municipalidad ni ~ en la Ordenanza emitida por la misma autoridad para el otorgamiento de patentes comerciales”

Finalmente, como corolario de lo anterior, tal como se desprende del expediente tenido a la vista de tramitación del Segundo Juzgado de Letras de esta ciudad, Rol C-2368-2019, ya a partir del 20 de diciembre de 2018, la SEREMI de Salud mediante la Resolución Exenta N°6266, habría impuesto al ente edilicio velar porque los residuos domésticos y asimilables generados en la comuna de Antofagasta fueran dispuestos en el Centro de Tratamiento denominado Chaqueta Blanca y, una semana después del último rechazo de informe de zonificación, el 18 de enero de 2019, por Resolución Exenta N° 300, de manera imperativa dicha SEREMI impuso a la demandada el uso de dicho Centro, ello ante la constatación de graves deficiencias de funcionamiento del antiguo, principalmente por la presencia de vectores, cobertura insuficiente de los residuos, existencia de quemas ilegales en diversos sectores y condiciones riesgosas de accidentabilidad.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, conforme a la prueba antes detallada, valorada de acuerdo a las reglas legales, se pudo concluir que la IMA, a través del Director de la DOM, al emitir continuos rechazos para el otorgamiento de los informes de zonificación, ejerciendo las facultades que el ordenamiento jurídico le confería, impuso a la actora exigencias no contempladas en la normas analizadas en un motivo previo, pues si bien no se encuentra controvertido por las partes que el proyecto sublite se emplazaba en una zona rural, y que por tanto, se encontraba fuera del marco del plan regulador de la comuna de Antofagasta, no constituía un motivo razonable para dichos rechazos la ausencia de la recepción definitiva de las obras, pues, - como se dijo más arriba - la inexistencia de dicha recepción, no era constitutivo de un óbice para que se le otorgara a Consorcio Santa Marta S.A. la patente comercial provisoria, incluso si se tiene en consideración que el artículo segundo de la Ordenanza N° 2/2013 señala que, en tal caso, además de establecer el deber municipal de otorgar la misma, ésta caduca de pleno derecho en un año, en caso de no cumplirse con el reseñado requisito exigido por el artículo 145 de la Ley citada, antecedentes todos, que permiten aseverar, que se configura en este aspecto una falta de servicio en el sentido de que dicha Dirección Municipal en su calidad de ente u órgano público que forma parte de la Administración del Estado, otorgó una atención deficiente, incurriendo así en negligencia en el Servicio que presta, al retardar injustificadamente un trámite indispensable



para la obtención de la tantas veces mencionada patente comercial, con el carácter de provisoria, más aun que la actora, conforme a la documental detallada en esta sentencia, cumplía con todas las exigencias sanitarias y ambientales que tanto la DL 3063 y la Ordenanza N°2/2013 exigían, cuestión que se ve refrendado con lo señalado por la ltma. Corte de Apelaciones en las causas Rol Ingreso Corte N° 1014-2019 y 108-2020, como lo declarado de manera conteste por los testigos de la actora.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto al otro aspecto que se denuncia en este punto, como constitutivo de una falta de servicio, esto es, que el Departamento de Rentas municipales, pese a las solicitudes de patente provisoria formuladas por Santa Marta S.A. y que no habrían sido otorgada por no contar con informe de zonificación favorable, de acuerdo a los rechazos contenidos en los informes citados más arriba por parte de la DOM, lo cierto es que, entre la prueba rendida no existe antecedente que dé cuenta de algún acto administrativo que contenga la decisión municipal, en especial del Departamento referido, en orden a rechazar la petición de la sindicada patente, cuestión que no controvierte la demandada en su contestación de la demanda, pues solo arguye que habría obrado dentro de la esfera de las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confería.

Sin perjuicio de lo señalado en la demanda, de acuerdo al análisis realizado en esta sentencia y siendo inconcuso el hecho de no existir un pronunciamiento por parte de la IMA que rechace las solicitudes de patente provisoria, parece evidente que si el contribuyente, sea por la razones que fuese, no cumple con uno o más de los requisitos de la normativa aplicable a este respecto, deba emitirse, por parte de un órgano de la administración del Estado, un acto o declaración de voluntad que contenga la decisión de dichas solicitudes, cuestión que extraña la parte demandante.

En este ítem, resulta conveniente, en primer término indicar que los trámites que involucran la obtención de una patente comercial provisoria, constituyen un procedimiento administrativo especial, por encontrarse reglamentado por el DL 3063 y la Ordenanza N° 2/2013 de la IMA, debiendo considerarse en este punto que tal como se desprende de la **parte final del inciso 1° del artículo 1° de la Ley 19.880** que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, sus normas se le aplican supletoriamente a dichos procedimientos al señalar : *“En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter de supletoria.”*, a lo que debe añadirse que estas normas se aplican



igualmente a las municipalidades, lo que lógicamente comprende a cualquiera de sus direcciones o departamentos, de conformidad con lo establecido en su artículo 2°. Debiendo precisarse que esta ley, define en su artículo 3° el acto administrativo como: *“Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos.”*

Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública.”

A lo anterior, cabe syndicar que el artículo 5° de la citada ley, al consagrar el principio de escrituración, impone que los reseñados actos deberán expresarse por escrito o por medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma adecuada de expresión y constancia. Asimismo, el artículo 8° mandata en relación al principio conclusivo, que: *“Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad”*. Y, finalmente debe citarse el artículo 15 que consagra el principio de impugnabilidad indicando: *“Todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales.”*

Sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión.

La autoridad que acogiere un recurso interpuesto en contra de un acto administrativo, podrá dictar por sí misma el acto de reemplazo.”

De acuerdo a lo anterior, se puede aseverar, que cualquier solicitud cuyas etapas de tramitación se encuentren establecidas en un cuerpo normativo que deban llevarse a cabo ante un órgano que forma parte de la administración pública, deberá cumplir siempre con los principios que lo informan y a los que se ha hecho referencia más arriba, debiendo indicarse en este punto, que en la especie se encuentra probado que Consorcio Santa Marta S.A. habría presentado, para su tramitación ante la IMA, específicamente ante su Departamento de Rentas, tres solicitudes para el otorgamiento de patente comercial provisoria, todas ellas con un informe de zonificación desfavorable por parte de la DOM, pero sin que existiese un acto administrativo terminal que contuviera una declaración expresa de



voluntad del órgano competente para su otorgamiento, aceptándola o rechazándola, lo que evidentemente vulneró los principios fundamentales que informan los procedimientos administrativos y con ello, conculcó la posibilidad del administrado de ejercer las herramientas de impugnación que le confería el ordenamiento jurídico para revertir dicha decisión, lo que por lo demás, violenta garantías fundamentales de un debido proceso, todo lo cual, permite aseverar que la IMA nuevamente incurrió en una negligencia en el servicio que presta a la ciudadanía, debiendo por tanto también **acogerse** en esta parte la falta de servicio demandada.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, respecto al requisito de **que exista un daño para la víctima**, conforme al mérito del proceso y de la prueba rendida, en especial la declaración de los testigos de la parte demandante señores Tomás Gálvez Salas y Pedro Rivas Valdivia, es posible sostener que las faltas de servicio asentadas en esta sentencia habrían provocado a la demandante una serie de menoscabos económicos derivados precisamente del actuar municipal, sin perjuicio que estos mismos hechos eventualmente puedan constituir una afectación a la imagen de la Sociedad demandante tanto en su confiabilidad financiera como en su prestigio ante sus trabajadores y la comunidad antofagastina, toda vez que la tardanza en la aprobación del proyecto definitivo, significó que en la práctica la concesionaria hiciera desembolsos dinerarios necesarios para continuar con la marcha del proyecto, principalmente por la contratación de personal encargado de la administración, resguardo de las instalaciones construidas y para la ejecución de obras menores de mantención, en un número superior a 15 personas, por lo que la empresa, conforme a lo sindicado por aquellos deponentes, debió destinar mensualmente una suma que en promedio ascendió a \$30.000.000.- aseverando además estos testigos, que en razón que el Centro de Tratamiento se encontraba en condiciones de funcionamiento desde julio del año 2017, perfectamente podría haber iniciado operaciones, con ingresos estimados de \$100.000.000.- mensuales, situación que se habría extendido hasta el mes de diciembre de 2019, época en que la autoridad sanitaria obligó a dar inicio de las operaciones, todo lo cual permite dar por configurado el segundo requisito de la responsabilidad demandada, sin perjuicio de lo que se resolverá más adelante en relación a la evaluación de los daños reclamados.

Por último, en cuanto a la **relación de causalidad entre el daño producido y la falta de servicio**, de la documental allegada por las partes, la testimonial rendida en autos, como lo declarado por la Ilma. Corte de



Apelaciones en la sentencia tantas veces citada como lo concluido por el perito Durán Aros, dado el contexto crítico en el cual se desarrollaron los hechos, que hacía indispensable que el Centro de Tratamiento concesionado a la demandante debiese entrar en funcionamiento en una fecha muy anterior a aquella en que se procedió a la aprobación definitiva del mismo por parte de la IMA, es dable concluir que encontrándose vinculados entre sí la negligencia de parte de la Municipalidad y el daño causado a la víctima, se dará por establecido este requisito, más aún, si realizándose una supresión mental hipotética de los hechos analizados en la especie, desaparece también el resultado lesivo, es decir, si la Ilustre Municipalidad de Antofagasta hubiese actuado de manera eficaz, eficiente y oportuna - lo anterior basado en un estándar de conducta esperable para un órgano público - el resultado causal no se hubiese producido, es decir, el daño al administrado, por lo que no cabe sino concluir fundadamente que entre el actuar negligente de la Municipalidad y el perjuicio causado, existe una necesaria relación directa de causalidad, configurándose entonces los presupuestos que hacen procedente la responsabilidad municipal que se demanda.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, corresponde entonces determinar si la falta de servicio en que incurrió la municipalidad demandada ocasionó perjuicios económicos a la demandante.

Al respecto, la actora reclama por concepto de daño emergente los gastos con ocasión de la demora y exigencias adicionales establecidas por la IMA, así como de la necesidad de concurrir periódicamente a sus dependencias con la finalidad de obtener una respuesta a los requerimientos, situación que se extendió desde julio del año 2017 hasta por lo menos abril de 2019, adicionando los costos de traslado, mantención y reparación de las instalaciones del relleno sanitario que se han deteriorado durante la espera del pronunciamiento de la demandada y demás gastos generales, lo que cuantifica en la suma de **\$698.000.000.-**

De otra parte, dentro los daños materiales demandados, solicita por concepto de lucro cesante, la suma **\$1.488.000.000.-** consistente en lo que en el transcurso de 22 meses (desde el mes de julio del año 2017 hasta la fecha de presentación de la demanda) dejó de percibir a razón de \$67.000.000.- mensuales, lo anterior por concepto de utilidades libres de impuestos, que no incluye los costos de personal, de mantención y de operación de maquinaria del relleno sanitario.



A este respecto, debe tenerse en especial consideración, en primer término, lo declarado de manera conteste por dos de los cuatro testigos de la parte demandante quienes al declarar al punto tres de la interlocutoria de prueba – *“Efectividad que como consecuencia de la falta de servicio o del actuar negligente de la demandada, la actora sufrió perjuicios. Relación de causalidad, naturaleza, antecedentes y montos.”* –, señalan lo siguiente, don Tomás Eduardo Gálvez Salas indicó: *“Cuando me liberaron de mis funciones para el proyecto ya que estaba con las obras terminadas y con las autorizaciones para operar, esto fue en Octubre del 2017, el personal de Chaqueta Blanca era alrededor de 25 personas entre operadores; nocheros; administrativos y profesionales.*

Dado a que yo mismo contraté a muchas de esas personas sé que el costo de mantener a todo ese equipo en el lugar además del pago de las cuentas de servicios varios mensuales era aproximadamente de \$30.000.000, los cuales Santa Marta pagaba todos esos gastos. Al no entrar en operación lo declarado anteriormente el proyecto no contaba con ingresos por lo tanto estos gastos sólo son pérdidas para la empresa es decir para Santa Marta y todo esto hasta la entrada en operación que fue a finales de Diciembre del 2019 .-

O sea, los gastos incurridos por Santa Marta ascendían a la suma de \$30.000.000 mensuales los que debía absorber y asumir no teniendo entrada o sea, los gastos incurridos por Santa Marta ascendían a la suma de \$30.000.000 mensuales los que debía absorber y asumir no teniendo entrada alguna debido a la imposibilidad poder entrar en operaciones del relleno<,MI sanitario.

Debido a la misma negativa por parte de la Municipalidad de entregar patentes y permitir a la empresa dar inicio a la operación, la empresa no ha podido tener ingresos por concepto de servicio relleno sanitario (disposición final de residuos) durante el período antes indicado, perdiendo una facturación mensual proyectada de \$100.000.000 aproximadamente.

Por último, sobre el personal antes mencionado, durante el año 2018 la empresa tuvo que despedir gente para poder así disminuir el costo por el hecho de no entrar en operaciones el relleno sanitario.”

Y, de otra parte, don Pedro Eduardo Rivas Valdivia al declarar que: *“Efectivamente debido a la imposibilidad de contar con la autorización Municipal desde Julio del año 2017, la empresa -Santa Marta sufrió una serie de perjuicios derivados de esta actuación municipal. A modo de*



referencia, la dotación de personal contratado para este proyecto ascendía a aproximadamente 15 personas, encargadas de la administración y del resguardo de la instalación construida, además de la ejecución de una serie de obras menores de mantención para evitar el deterioro de la instalación, Producto de ello, la empresa debió destinar aproximadamente la cantidad de \$30.000.000 mensuales para cumplir con esta obligación, que se debía extender hasta que la Municipalidad otorgara la respectiva autorización.

Junto con este perjuicio, lo más importante es que la instalación tenía todos los permisos otorgados y por lo tanto no tenía impedimentos legales para funcionar. En virtud de ello, desde Julio del 2017 perfectamente se pudo iniciar el servicio de operación que derivaría en ingresos estimados en \$100.000.000 mensuales. Este perjuicio se extendió por todo el período en que la instalación no pudo operar, el cual se dio por finalizado en el mes de Diciembre del 2019 debido a una imposición de la Seremi de Salud de Antofagasta, que obligó a Consorcio Santa Marta a través de una alerta sanitaria, a iniciar sus operaciones entendiendo que todos los permisos requeridos ya se encontraban otorgados”.

Asimismo, del acta de reunión N° 1, ya a esa época, el Gerente General de Santa Marta S.A. expresó lo siguiente: *“Solicitó de manera urgente resolver la situación pendiente del Estado de Pago N°5, que se encuentra pendiente de pago desde mayo del año 2017, situación que ha ocasionado el bloqueo de las cuentas bancarias de la empresa.”* Respondiendo a lo anterior, don Héctor Gómez, Administrador Municipal que: *“Explicó la importancia de asumir la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto de manera conjunta, sobre todo por el hecho que están otorgadas las autorizaciones y están gestionados los pagos hasta el Estado de Pago N°5. Es decir, no resulta razonable que tanto la empresa contratista como alguna unidad del municipio eludan la responsabilidad que les compete en cada caso”.*

En este escenario, de la probanzas analizadas, surgen una serie de presunciones judiciales que por cumplir con los requisitos legales, en su conjunto permiten sostener que producto de las negligencias cometidas por la demandada en su actuar como órgano del Estado, por encontrarse todas ellas concadenadas y con un suficiente nexo de causalidad, toda vez que la no aprobación de los planos asbuilt, que conllevó, entre otros aspectos, a que no se recepcionaran provisionalmente las obras, ni se conformara la comisión de revisión, indispensable para la puesta en marcha del proyecto, lo que por lo demás importó que el mismo órgano antes sindicado, a saber,



el Director de la Dirección de Obras Municipales emitiera continuos oficios rechazando el informe de Zonificación, indispensable para la obtención de patente comercial provisoria, lo que en los hechos produjo un rechazo tácito de tal petición, al no existir un acto administrativo formal del Departamento de Rentas Municipales, trajo como consecuencia que Consorcio Santa Marta S.A. no pudiese cumplir con los trámites imprescindibles, para la puesta en marcha del proyecto, y con ello percibir los ingresos económicos propios de dicha actividad, tal como señalan sus testigos, y además incurriera en gastos operaciones necesarios para concluir el proyecto que le fue encomendado, todo lo cual, le produjo un evidente perjuicio económico.

Sin embargo, no obstante lo sindicado y además teniendo presente la circunstancia inconcusa que los deponentes referidos en párrafos anteriores se refieren a montos dinerarios representativos de la pérdida económica que habría experimentado la demandante, lo cierto es que, ni aun lo transcrito del acta de folio 51, son suficientes para construir una presunción judicial en lo referente al *quantum indemnizatorio*, por existir prohibición expresa en los artículos 1708 y siguientes del Código Civil.

En este orden de ideas y ,si bien está acreditado que la falta de servicio provocó un perjuicio económico a la demandante, no existen en el proceso probanzas suficientes tendientes a acreditar en forma idónea, concreta y precisa los montos de los perjuicios reclamados por conceptos de daño emergente y lucro cesante, más aun que tal precisión deviene de sus propios conceptos, toda vez que, en cuanto al primero, la doctrina ha señalado que se entiende por daño emergente “*la pérdida real, efectiva y acreditada que se produce tras una lesión*”, mientras que respecto del segundo indica que “*es la ganancia esperada que no se obtuvo debido al incumplimiento del contrato o al hecho dañino.*”, de todo lo cual fluye que los quantum indemnizatorios pedidos por dichos conceptos deben ser acreditados en forma apta por quien los alega, conforme lo mandata el artículo 1698 del Código de Bello, cometido que no pudo cumplir la demandante por las razones antes anotada, lo cual impide acoger la demanda a propósito de estos capítulos, por lo que será **rechazada** en esta parte.

CUADRAGÉSIMO: Que, mención aparte merece el daño moral demandado, derivado de la falta de servicio de la IMA, el que la demandante fundamenta arguyendo que su instalación en Antofagasta fue únicamente para ejecutar el proyecto licitado y operar el relleno sanitario Chaqueta Blanca, por lo que el hecho de no poder operar el relleno, encontrándose



éste operativo y listo para ello, es un hecho de gravedad para una entidad de este tipo, pues debió incurrir en gastos y costos adicionales no contemplados, lo que significó recurrir a entidades financieras poniendo en tela de juicio su confiabilidad y eficiencia.

A este respecto, se debe tener presente que hoy en día se concibe el daño moral del modo más amplio posible, incluyendo todo daño a la persona en sí misma – física o psíquica -, como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales. Comprende entonces el daño moral el atentado a los derechos de la persona, a su salud, a su estética, esfera de intimidad, libertad, honor o sentimientos de afección, debiendo precisarse que la profesora **CARMEN DOMÍNGUEZ** a propósito de este tipo de daño demandado por personas jurídicas, presenta ciertas particularidades “a) *debe tratarse de un ente dotado de personalidad jurídica reconocida*, b) *debe de distinguirse siempre entre el daño propio de la persona jurídica y el que puede afectar a sus integrantes* y c) *el interés esgrimido por la persona jurídica ha de ser uno que le sea propio: su prestigio, el secreto de sus propios negocios, la defensa de su nombre o razón social; pero no, por ejemplo, el del sector económico o social al que pertenezca.*” (El Daño Moral Tomo II, Carmen Domínguez Hidalgo, pp. 725), de lo que se desprende que estos entes morales para accionar con el fin de obtener el resarcimiento de este tipo de daño deben acreditar que efectivamente el hecho dañoso, es decir la falta de servicio en este caso, provocó atentados que afectaron de alguna manera su nombre, reputación o fama comercial.

En este punto, lo primero que debe indicarse, es que constituye un hecho acreditado en esta causa que el proyecto adjudicado a la demandante, debido a las faltas de servicios establecidas en esta sentencia, se vio imposibilitado de funcionar pese a encontrarse en condiciones sanitarias y ambientales para entrar en operaciones generando con ello las ganancias esperadas a partir de su puesta en marcha, más aun si se tiene en especial consideración, conforme se desprende de lo señalado de manera conteste por los testigos de la demandante señores Gálvez Salas y Rivas Valdivia y lo precisado por el perito Aros Durán en su informe, ello podría haber ocurrido a lo menos un año y medio antes de la fecha en que la SEREMI de Salud de esta ciudad dicta las resoluciones sanitarias, que conllevaron a dar inicio a la etapa de puesta en marcha del relleno sanitario Chaqueta Blanca, debido a la grave situación por la que atravesaba la comuna, testigos que por lo demás, indicaron que en ese lapso de tiempo, la demandante debió efectuar desembolsos económicos para mantener un



número de trabajadores suficientes para la administración y resguardo de las instalaciones, pese a no percibir entradas por concepto de la disposición final de residuos sólidos domiciliarios de la comuna, sumado al hecho, que conforme lo indica el primer testigo individualizado en este párrafo “... durante el año 2018 la empresa tuvo que despedir gente para poder así disminuir el costo por el hecho de no entrar en operaciones el relleno sanitario.”, lo que evidentemente genera en cualquier empresa, tener que soportar una carga pecuniaria con dineros propios, provocando un incuestionable empobrecimiento de sus arcas, pues dichas sumas se constituyeron como pérdidas en su contabilidad, al no encontrarse percibiendo ingresos dinerarios por las circunstancias anotadas, ya que una instalación como la de Chaqueta Blanca significaba mantener al día el pago de servicios básicos como de remuneraciones de sus trabajadores, tal como ya se indicó más arriba, a tal punto que en el Acta de reunión N° 1 allegada a folio 51 y datada por el perito Aros Durán en el mes de enero de 2018, - documento inobjeto de contrario-, el Gerente General de Santa Marta S.A. señor Rodolfo Bernstein indicó que debido al no pago del estado de pago N°5 pendiente de ser solucionado desde mayo de 2017, habría provocado el bloqueo de las cuentas bancarias de la empresa.

Así las cosas, de lo anterior surgen una serie de presunciones judiciales que por gozar de la suficiente gravedad, precisión y concordancia de conformidad al artículo 426 del Código de Procedimiento Civil en relación con el 1712 del Código Civil permiten concluir que efectivamente, como consecuencia de las negligencias en el servicio que prestaba la demandada en su calidad de órgano público del Estado, provocó que la actora viera disminuida su solvencia económica debido a la tardanza injustificada en aprobarse definitivamente el proyecto y posterior puesta en marcha, siendo demostrativo de dicha circunstancia que para disminuir gastos debido a la imposibilidad de enterar en operaciones el relleno sanitario, debió durante el año 2018 desvincular a parte de sus trabajadores, lo que provocó además que al inicio de aquel año se le bloquearan las cuentas bancarias a la empresa, cuestión que hace palmaria una afectación a su prestigio financiero y, además que se viera perjudicada su imagen pública, tanto ante sus trabajadores (como consecuencia de los despidos producidos por la reducción de costos operacionales) como ante la comunidad de Antofagasta, toda vez que, fue de conocimiento público, en aquella época, las manifestaciones llevadas a cabo por vecinos de los sectores aledaños al vertedero ilegal de La Chimba por los efectos perniciosos que



experimentaban debido a la existencia de vectores y quemas ilegales de basura, no obstante encontrarse en condiciones óptimas – como ya se dijo - de funcionamiento, antecedentes todos que permiten dar por configurado el daño invocado en este ítem por la demandante, por lo que será **acogida** la demanda en cuanto a la indemnización que se reclama por el daño moral causado, la que se regulará en el monto de **\$90.000.000.-**, cantidad que se estima prudente, razonable y de toda justicia ante el actuar negligente de la municipalidad demandada, atendida la envergadura del proyecto el que llevaba implícito fondos públicos por una suma superior a los \$4.000.000.000.- , más aún que conforme lo aseverado por el perito en sus conclusiones no existía en nuestro país otro proyecto con características similares.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran o modifican las conclusiones a las que se ha arribado.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que, no habiendo resultado totalmente vencida la parte demandada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y Vistos además, lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, los artículos 144, 160, 170, 426 del Código de Procedimiento Civil; 1698 y siguientes Código Civil; Ley 18.575; Ley 18.695; Ley 19.880; DFL 458 (Ley General de Urbanismo y Construcción) y su Ordenanza; DL 3063 modificado por la Ley 20.494, Ordenanza N°2/2013 de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, **SE DECLARA:**

I.- Que, **SE RECHAZA** la tacha opuesta por parte demandante respecto de los testigos Héctor Gómez Salazar, Juan Gálvez Barnechea y Raúl Aracena Berkhoff en relación a la causal del N° 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

II.- Que, **SE ACOGE** la tacha del artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, opuesta por parte demandante, respecto de los testigos Héctor Gómez Salazar, Juan Gálvez Barnechea y Raúl Aracena Berkhoff.

III.- Que, **SE ACOGEN** las tachas opuestas por la parte demandada respecto a los testigos Alejandra Orellana Araya y César Méndez Orellana.

IV.- Que, **SE ACOGE parcialmente** la demanda deducida con fecha 17 de abril de 2019 – folio 1 -, por Consorcio Santa S.A. en contra de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta – ambas partes ya individualizadas,



por los perjuicios generados como consecuencia de las faltas de servicio que han quedado establecidas en esta sentencia, condenándose a la demandada a pagar a la demandante, por concepto de daño moral la suma de **\$90.000.000.- (noventa millones de pesos)**.

V.- Que, la suma ante referida deberá liquidarse en su oportunidad, aplicándose los reajustes e intereses que correspondan entre la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia y la de su pago efectivo.

VI.- Que, **SE RECHAZA** la demanda en cuanto a los montos demandados por concepto de daño emergente y lucro cesante.

VII.- Que, no se condena en costas a la parte demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad contemplada en el artículo 319 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol C-2102-2019

Dictada por don **ARTURO ANDRÉS IRIBARREN PÉREZ**, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras de Antofagasta.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Antofagasta, dos de Junio de dos mil veintiuno

